

TENDENCIAS SOCIALES RECIENTES EN ITALIA (1960-1995)

Por el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. Alberto Martinelli *

INTRODUCCIÓN

La desigual modernización de la sociedad italiana

En un mundo altamente interdependiente, cada país en vías de modernización tiene que enfrentarse a desafíos comunes. Con todo, dadas su historia y cultura autónomas, cada país es único. Sin embargo, Italia parece con frecuencia «más único» que otros.

Para muchos observadores, Italia se asemeja a un rompecabezas o a algo confuso, nunca a un caso «normal». Los medios de comunicación internacionales algunas veces describen a Italia como si estuviera al borde del colapso (una portada de la revista francesa *L'Express* de mediados de los años setenta representaba a una península italiana desgajada de los Alpes y flotando en medio del Mediterráneo), y otras veces la elogian como un ejemplo de comportamiento exitoso entre los países desarrollados (el «milagro económico» italiano de los años cincuenta y primeros sesenta, la recuperación de mediados de los ochenta). En la actualidad, la imagen que del país dan los medios de comunicación internacionales y nacionales es borrosa e incierta, recalcando, por un lado, la crisis de legitimidad de los partidos políticos, el atraso de los aparatos del Estado y el alcance del crimen organi-

* Sesión del día 15 de febrero de 2000.

zado y, por otro lado, la vitalidad de la economía italiana, la capacidad de la sociedad civil italiana para reaccionar ante la corrupción y el mal gobierno.

Mientras los estudiosos suelen estar de acuerdo en que, durante la primera mitad del período de cincuenta años transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial, Italia fue un ejemplo exitoso de crecimiento económico y modernización social, durante la segunda mitad —que comienza a fines de los sesenta— la mayoría tiende a hacer hincapié en la crisis en vez de en el cambio exitoso. En los estudios más interesantes de los años setenta, la palabra «crisis» es la que más a menudo se utiliza para interpretar el cambio social italiano. Italia es descrita o bien como un país acosado por una variedad de calamidades —económicas y políticas, nacionales e internacionales— o bien como una versión exagerada de la crisis general de consenso y gobernabilidad de las democracias occidentales. Sin embargo, más recientemente, otros estudiosos han representado a Italia como un país que se mueve confusa y dolorosamente hacia una democracia moderna. En otras palabras, la visión «optimista» de este estado de cosas es que, a través de estas múltiples crisis, ha tenido lugar una transición a una democracia moderna y madura. Mientras que la visión «pesimista» es que las crisis endémicas representan un lento pero persistente deterioro, ya que no son lo suficientemente agudas como para provocar una respuesta fuerte, pero son lo suficientemente serias como para impedir un cambio ordenado y un progreso estable.

Mi opinión es que la transformación social italiana se puede ver de ambas formas: como una historia de éxito y como una secuencia de crisis. La especificidad italiana reside, por encima de todo, en su capacidad no sólo para sobrevivir, sino para crecer y cambiar en medio de una multiplicidad de crisis endémicas, que, no obstante, nunca dan lugar a una crisis sistémica. Una razón fundamental de esta resistencia a las crisis recurrentes es que la sociedad italiana está fragmentada en varios sistemas sociales regionales y locales centrados en la familia y la comunidad que fomentan la formación de identidades fuertes y están integrados en el conjunto de la sociedad nacional por una economía de mercado y una red de organizaciones sociales y políticas.

La gravedad de la crisis política de principios de los noventa reside en el hecho de que uno de los mecanismos integradores, los partidos políticos, ha perdido gran parte de su influencia y capacidad de integración. Con todo, no parece probable que incluso esta crisis política, que se ha caracterizado por los juicios a políticos corruptos, funcionarios estatales y empresarios, se vaya a generalizar y conduzca a una transformación global de las relaciones sociales. Ha propiciado cambios significativos en el sistema político, pero no en el conjunto de la sociedad.

Se puede ver como una autodefensa de la sociedad civil frente a partidos demasiado poderosos, una reacción popular a la corrupción generalizada y una lucha entre las viejas y las nuevas élites.

Nuestro estudio del cambio social en la Italia contemporánea abarca un período de treinta y cinco años, desde comienzos de los sesenta hasta 1995, mientras que todas las demás monografías de la serie Cuadro Comparativo del Cambio Social terminan en 1990. Sin embargo, aunque el análisis de las tendencias está limitado a este período, la interpretación general del alcance y significado de la transformación social deben ser enmarcados dentro de una perspectiva más amplia, teniendo en cuenta el período anterior que se remonta hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra produjo una escisión más dramática para Italia que para otros países que participaron en ella —tales como Estados Unidos o el Reino Unido—, porque provocó el colapso del régimen fascista y la transición a la democracia parlamentaria mediante una guerra civil. Italia cambió de un régimen autoritario (con rasgos totalitarios) a una democracia parlamentaria, de una economía con tendencias «autárquicas» a un mercado libre, de una sociedad cerrada con ambiciones «imperiales» a una sociedad abierta. La democracia parlamentaria y la liberalización económica fueron condiciones previas básicas para la integración social y la estabilidad política en los años de la posguerra, y después para una intensa y rápida industrialización y transformación social a partir de finales de los años cincuenta.

Vistos en este contexto más amplio, los comienzos de los sesenta son un punto de partida adecuado para un estudio de la modernización de Italia, esto es, para analizar las maneras en que la sociedad italiana se enfrentó a los complejos problemas planteados por las implicaciones sociales de la industrialización económica, por un lado, y por la institucionalización de los valores y las prácticas de una democracia de masas, por otro.

A comienzos de los años sesenta, la industrialización en Italia ya estaba en marcha. Sin embargo, en la cima del «milagro económico» y un siglo después del nacimiento del estado italiano, los problemas más difíciles aún estaban por llegar: la institucionalización y la modernización cultural de un país en rápida e intensa industrialización y de sus instituciones políticas y agencias estatales, el manejo de los conflictos relacionados con el crecimiento, las respuestas a la «revolución de las expectativas crecientes» y a los intereses, identidades y valores opuestos de una sociedad crecientemente heterogénea. En Italia, estos problemas demostraron ser más persistentes y las tensiones sociales más difíciles de manejar, porque tanto el potencial organizativo de sus modernas instituciones estatales como el sentido de una identidad nacional colectiva eran débiles. Todos estos problemas sólo se pue-

den apreciar plenamente si se observan desde la perspectiva más amplia del último medio siglo.

Esta introducción tiene como propósito proporcionar una interpretación sintética del camino recorrido por Italia hacia la modernización desde la Segunda Guerra Mundial, tomando como base las principales tendencias sociales analizadas en el volumen. En primer lugar, trataré brevemente del tipo y del alcance de la transformación respectiva, los cambios básicos subyacentes y las continuidades con respecto al pasado, y las diferencias con otros países industrialmente avanzados, teniendo en cuenta tanto el «código genético» de la sociedad italiana como las influencias del sistema global en el proceso de modernización. En segundo lugar, abordaré el caso italiano como un ejemplo del «ciclo de crecimiento y modernización» y hablaré de sus rasgos específicos. En tercer lugar, desarrollaré una interpretación sintética—una versión crítica de la teoría de la «modernización incompleta»—y examinaré la sociedad italiana a la luz de los problemas sociológicos básicos del orden y del cambio social, centrándome en tres cuestiones fundamentales: *a)* los factores y los actores responsables de la desigual modernización; *b)* los mecanismos de integración básicos; *c)* los principales agentes de la innovación y el cambio.

EL CAMBIO SOCIAL EN LA SOCIEDAD ITALIANA POSTERIOR A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Una sociedad nacional puede ser definida como un territorio circunscrito, una cultura distintiva y un conjunto específico de instituciones económicas y políticas. En el medio siglo transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial, Italia ha experimentado cambios fundamentales en su economía, sociedad, cultura y sistema político. Ha sido una transformación completa con muchas facetas, de alguna manera una verdadera revolución social.

En el curso de esta transformación, la cual será analizada detalladamente en las próximas páginas y aquí es brevemente resumida, la sociedad italiana pasó:

— de una economía agrícola con enclaves industriales a una economía industrial con residuos rurales y, luego, a una economía de servicios con fuertes cimientos industriales, donde una «especialización flexible» ha ido sustituyendo progresivamente a los tipos de organización laboral fordista-taylorista (capítulos 0 y 5);

— de una economía de crecimiento lento, independiente y predominantemente protegida, a una economía orientada a la exportación y de rápido creci-

miento, bien integrada en el mercado mundial, aunque con áreas residuales de economía marginal (capítulo 0);

— de una expansión demográfica a casi un crecimiento de población cero, y del predominio de la familia extensa al predominio de la familia nuclear (capítulo 0);

— de un país exportador de mano de obra, con emigraciones internas masivas a las zonas metropolitanas, a un país importador de mano de obra (alrededor de 1,6 millones de inmigrantes a principios de los noventa), con una población en descenso en las principales ciudades (capítulo 4);

— de una sociedad localmente fragmentada y predominantemente campesina a una sociedad de la información, madura y urbana, donde el trabajo intelectual está sustituyendo gradualmente al trabajo manual (capítulo 4);

— de una estructura social simplificada, con claras divisiones de clase e identidades, a una sociedad de masas socialmente fragmentada, donde las barreras entre las clases sociales se han debilitado y ha emergido una estructura jerárquica diferente (capítulo 6);

— de una estructura social relativamente estática con expectativas limitadas a una estructura social dinámica con procesos significativos de movilidad social y expectativas constantes de un mayor bienestar (capítulo 6);

— de actitudes de consumo tradicionales y diferenciadas por la clase a patrones de consumo individualistas y en masa (capítulos 6 y 12);

— de una sociedad fragmentada con subculturas y dialectos locales a una nación más unificada con una lengua unificada, por virtud del sistema escolar y la difusión de la televisión (capítulos 8, 9 y 15);

— de una constelación de regiones y subregiones étnicamente homogéneas a una sociedad nacional étnicamente heterogénea con nuevas tensiones étnicas y con nuevas barreras sociales y culturales entre los grupos nativos e inmigrantes (capítulo 16);

— de un sistema solidario basado en la familia a un costoso sistema de asistencia social, que ha contribuido a generar una pasmosa deuda pública (capítulo 8);

— de la autoridad personal tradicional en las relaciones entre padres e hijos, en las escuelas y en las relaciones laborales, a patrones organizativos donde el acuerdo es esencial (capítulo 5);

— de un *status* de la mujer dependiente de la autoridad de los padres o del marido a un *status* autónomo, con una creciente participación en la fuerza laboral y un acceso cada vez mayor a las profesiones que estaban monopolizadas por los hombres, y con igualdad de derechos en la legislación familiar (capítulo 3);

— de una cultura tradicional y religiosa a una cultura moderna y secular, encarnada por los estilos de vida —más que por los valores— del individualismo (capítulos 9 y 17);

— de un régimen político autoritario a una democracia masiva con sufragio universal, partidos políticos poderosos y una compleja red de movimientos colectivos y asociaciones políticas y culturales (capítulos 9 y 11);

— de conflictos políticos generados por la industrialización y definidos principalmente por el antagonismo entre las clases sociales a un conjunto de conflictos de intereses y valores más diversificado, como los existentes entre los trabajadores autónomos y los empleados, entre el sector privado y el estado de bienestar, entre los valores económicos y los ecológicos (capítulos 7 y 17).

Algunos de estos procesos son claramente nuevos, mientras que otros muestran una continuidad significativa con el pasado y revelan una especie de «código genético» de la sociedad italiana.

CAMBIOS RADICALES Y CONTINUIDADES DESTACABLES: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON RESPECTO A OTROS PAÍSES OCCIDENTALES

Italia no se convirtió en un país industrial hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como muestran los indicadores de producción económica: el PIB, el consumo, los ahorros y los índices de inversión se elevaron de forma espectacular entre 1951 y 1991, y las proporciones de la fuerza laboral empleada en los diversos sectores cambió de manera asombrosa. Pero, teniendo en cuenta la velocidad del proceso de crecimiento económico, la transición a una economía madura, industrial tuvo lugar cuando aún estaban ocurriendo los procesos de «acumulación primitiva». En ciertas regiones, el desarrollo de un sector terciario sorteó por com-

pleto la etapa de la formación de una estructura industrial, provocando así desequilibrios económicos.

El fuerte localismo tradicional de Italia continuó en forma de polos industriales especializados (tales como Biella y Prato en la industria textil, Brescia en la metalurgia y Sassuolo en la de los azulejos), demostrando una notable capacidad para adaptarse al mercado internacional. En ciertas regiones, una economía informal bien desarrollada persistió paralelamente a las estructuras de mercado modernas. También la expansión del mercado y la explosión de la empresa privada fueron acompañados por la persistencia y el crecimiento del sistema de empresas de propiedad estatal: una tendencia que fue modificada recientemente con una oleada de privatizaciones de bancos y corporaciones industriales.

La estructura de clases de Italia ha cambiado espectacularmente a lo largo de los últimos cincuenta años, con la fragmentación de las clases principales en subclases y en grupos de prestigio y la aparición de una sociedad de masas. La clase campesina casi ha desaparecido y el número de agricultores ha caído en picado (la proporción de gente que trabaja en la agricultura pasó de un 50 % a menos de un 10 % entre 1951 y 1991). El número de trabajadores industriales aumentó rápidamente con el «milagro económico» de los años cincuenta y sesenta, y más tarde declinó rápidamente a causa de las medidas orientadas al ahorro de mano de obra.

La constelación de las clases medias se expandió debido al crecimiento constante de las nuevas clases medias (empleados privados y públicos, militares, técnicos y profesionales) y la permanencia de las clases medias tradicionales (artesanos y comerciantes). La burguesía también se expandió, pero el distintivo estilo de vida burgués se hizo progresivamente más borroso en la cultura de la sociedad de masas. Por un lado, sobrevivieron destacadas y amplias oleadas de movilidad social; por el otro, las tendencias oligárquicas permanecieron con fuerza y las desigualdades sociales causadas por la riqueza y el poder continuaron reproduciéndose.

Desde los años sesenta, el cambio cultural ha sido más rápido en Italia que en ningún otro país de Europa Occidental y ha contribuido a que los valores, actitudes y estilos de vida italianos sean más similares a los de otros europeos occidentales, aunque conservaron algunos rasgos específicos. La distinción entre comunidades urbanas y rurales, que todavía era clara en los años cincuenta, se desvaneció a medida que el tipo de vida urbana prevalecía en todos los lugares.

La secularización de la cultura de masas tuvo lugar al mismo tiempo que la urbanización en los años sesenta y setenta, como muestran los cambios legisla-

tivos —mediante la aprobación de leyes relativas al divorcio y al aborto y reformas a la ley familiar—, una moral sexual cambiante y la constante caída de la asistencia a la iglesia. La Iglesia como institución perdió parte de su importancia simbólica y atractivo ideológico, y las controversias religiosas se hicieron menos importantes que en el pasado. No obstante, las creencias religiosas y los movimientos colectivos desempeñaron un papel muy importante en la política italiana (otro rasgo específico de la sociedad italiana), y aún tienen un impacto significativo, aunque en disminución, sobre las preferencias del electorado.

Por un lado, el individualismo se convirtió en un modo de vida compartido por prácticamente todos los italianos, con independencia de las preferencias ideológicas y políticas, algo similar a lo sucedido en otras sociedades occidentales. La primacía de los objetivos individuales y de la autosatisfacción sobre los objetivos colectivos y la construcción de la sociedad se han convertido en rasgos crecientemente distintivos de la cultura italiana. El predominio del individualismo ha ido acompañado por un rechazo generalizado de los valores jerárquicos y de las relaciones de autoridad, y supuso un pronunciado declive de los tipos tradicionales de clases y solidaridades comunitarias, pero se ha visto compensado por una inclinación generalizada a participar en actividades de grupo voluntarias. La famosa crítica al individualismo particularista como un obstáculo para la acción pública, desarrollada por estudiosos norteamericanos a través de nociones tales como el «declive del hombre público» (Sennet), la «pérdida de la *civitas*» (Bellah) y la «implosión narcisista de la personalidad» (Lasch), sólo es aplicable hasta cierto punto a la Italia contemporánea por su tradición cultural de particularismo y fragmentación. Con la modernización, la forma tradicional de particularismo italiano dio paso a, y se entremezcló con, las nuevas formas de particularismo típicas de las sociedades de mercado contemporáneas.

Los rasgos tradicionales de la cultura social italiana, tales como el *familismo* y el localismo, siguieron siendo fuertes, al igual que los rasgos tradicionales de la cultura política, tales como el *trasformismo* y el *ribellismo*¹. El *familismo* puede definirse como la actitud según la cual las obligaciones para con la familia de uno se consideran mucho más fuertes que, e incluso hasta cierto punto en oposición a, las obligaciones para con la sociedad en su conjunto. El localismo se puede definir como una fuerte identificación con la comunidad local a costa de los derechos y deberes de la ciudadanía. La noción de *trasformismo* fue introducida por primera vez para describir el comportamiento de los miembros del parlamento italiano que a finales del siglo xix cambiaban sus alianzas de acuerdo a intereses grupales

¹ Término proveniente de la palabra italiana *ribellione* (rebeldía). [N. del t.]

minoritarios o personales. Aquí se emplea en un sentido más amplio como una combinación de la distorsión de la representación parlamentaria a través del reparto de influencias entre los grupos de poder (*patronage*), de la confusión entre el papel del gobierno y el papel de la oposición y la falta de hegemonía de la clase política. El *ribellismo* era en cierto sentido el homólogo del *trasformismo* en el comportamiento de las masas y se puede definir como la tendencia a desafiar cualquier autoridad política y a rechazar las reformas y el cambio ordenado en favor de planes utópicos de transformación global.

Políticamente, hubo un cambio radical del fascismo a la democracia parlamentaria de masas y la aparición de un sistema multipartidista, pero las actitudes tradicionales de la cultura política italiana, tales como «el instinto de las combinaciones» de Pareto y el radicalismo de masas, persistieron, aunque en formas un tanto diferentes. Un rasgo específico de la modernización política italiana fue el desarrollo de partidos políticos fuertes, bien enraizados en la sociedad civil y dotados de notables recursos ideológicos y organizativos. Los partidos políticos contribuyeron a la integración nacional y a la institucionalización de los valores y comportamientos democráticos, pero también ocuparon sistemáticamente las instituciones del estado y controlaron importantes áreas de la sociedad civil, como los bancos y las cadenas de televisión. Esta tendencia, junto al *trasformismo* de las elites políticas y el *ribellismo* de las masas, hizo que la crisis de legitimidad del Estado fuera más seria en Italia que en otros países.

Otro rasgo específicamente italiano fue la mayor intensidad de los conflictos violentos, que adoptó varias formas: del terrorismo al crimen organizado. Cualquier proceso de modernización conlleva una gran cantidad de conflictos añadidos. En Italia, con una administración estatal menos eficiente, una política pública menos coherente y una tradición de rebeldía y comportamiento ilegal, las maneras no violentas de resolver los conflictos, en igualdad de circunstancias, tienden a ser menos eficaces.

En general, el «código genético» de la sociedad italiana se formó a partir de una red compleja de ciudades con fuertes tradiciones locales, varias sedimentaciones lingüísticas, marcadas y duraderas divisiones entre las diferentes zonas del país (la «cuestión del Sur»), profundos vínculos familiares y comunitarios, una tradición religiosa omnipresente, partidos fuertemente ideologizados, la política de reparto de influencias (entre los grupos de poder) y una cultura política rebelde.

Como resultado de estos rasgos, Italia ha tenido un sentido de la identidad nacional más débil que el de otros países occidentales, un sentido de ciuda-

danía en tanto que comunidad cívica que impone un sentido de lealtad, solidaridad y de ser parte de algo, que es superior a todas las demás identidades.

A causa de este «código genético», y a causa del ritmo y la secuencia de la industrialización y modernización que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad italiana ha mostrado ciertas diferencias con respecto a otros países occidentales. De hecho, muchos de los procesos señalados antes eran comunes a otros países en vías de modernización, especialmente en Occidente; otros fueron más fuertes o más rápidos en Italia que en otros lugares, e incluso otros fueron específicamente italianos. Las peculiaridades italianas más significativas son:

- divisiones económicas y sociales persistentes entre las diferentes partes del país, desde el tradicional dualismo entre el Norte y el Sur a los modelos sociales más recientes de las «tres Italias»: las regiones tradicionalmente industriales del Noroeste, las regiones tradicionalmente atrasadas del Sur y el más recientemente desarrollado Este y las regiones del Adriático;

- una brecha entre el crecimiento económico y la transformación social, por un lado, y la modernización de las instituciones legales, de la administración pública y de la cultura política, por el otro;

- la resistencia y flexibilidad de las estructuras de solidaridad, principalmente la familia, pero también la comunidad local y las asociaciones de voluntarios;

- la fuerza de los partidos políticos, con su tendencia a «colonizar» la sociedad civil y a «ocupar» las instituciones del Estado, que en años recientes, junto a una corrupción política generalizada, ha provocado una seria crisis de legitimidad política;

- la debilidad de los gobiernos, la fragmentación política del Parlamento, el aislamiento del Estado respecto a los cambios sociales en el seno de una sociedad altamente politizada y la ineficiencia del Estado civil;

- el papel multifacético de la Iglesia Católica a la hora de influir en las actitudes culturales y de fijar normas de conducta, contribuyendo a la integración social mediante una red de organizaciones de voluntarios y de beneficencia vinculadas a ella, e influyendo en la vida política (la religión, en conjunción con la ideología anticomunista, proporcionó el terreno básico para la legitimidad del partido

de la Democracia Cristiana y para su, hasta hace poco, ininterrumpido papel de gobierno y de liderazgo en la política italiana);

— la difusión de conductas ilegales y el serio desafío planteado por el crimen organizado, que demostró ser capaz de explotar las oportunidades resultantes del crecimiento económico y de la política de reparto de influencias entre los grupos de poder (las numerosas «familias» del crimen organizado desarrollaron lazos con segmentos del sistema de partidos que se apoyan en dicho sistema de influencias para lograr el consenso, y en la corrupción política para obtener recursos adicionales para utilizarlos en la contienda por el poder político).

EL CICLO DE CRECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN

Debido a estos rasgos específicos, los estudiosos hablan de una «anomalía» italiana. Yo prefiero hablar de una versión específicamente italiana del ciclo de crecimiento y modernización. A primera vista, la transición de Italia a una sociedad moderna e industrial parece similar a la de otros países. Como tantas otras cosas que llegaron tarde, la industrialización de postguerra italiana tuvo lugar durante un corto período de tiempo (menos de dos décadas) y estuvo acompañada de cambios sociales y culturales simultáneos (urbanización, consumo de masas, secularización).

Siguió, hasta cierto punto, una secuencia común en la transformación social de las sociedades modernas, que podemos llamar el ciclo de crecimiento y modernización, un proceso de crecimiento económico con sus respectivos cambios sociales que da lugar a contradicciones, movimientos de masas y conflictos sociales, que, a su vez, estimulan varias respuestas institucionales, tales como cambios en las instituciones políticas, en la cultura y en las políticas del gobierno (reformas agrarias, políticas asistenciales, modos no violentos de resolver los conflictos). Las respuestas institucionales rara vez se correspondieron con las metas manifiestas de los movimientos colectivos; pero, en la medida en que cambiaron el contexto general y la situación específica en la que se desarrolla la acción colectiva, propiciaron una nueva configuración de las relaciones sociales, cambios en los conflictos sociales y nuevas relaciones de poder entre los actores políticos: en resumen, un nuevo orden social.

En la Italia contemporánea, esta secuencia tuvo lugar de manera clara, pero sólo parcialmente. El crecimiento económico rápido e intenso y las transformaciones sociales y culturales básicas (las emigraciones masivas y el éxodo rural,

el crecimiento de las áreas metropolitanas, la creciente alfabetización, la secularización, el consumo de masas, el progresivo individualismo, etc.) tuvieron lugar en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las «nuevas» contradicciones y los conflictos relacionados con el desarrollo industrial, especialmente las conflictivas relaciones entre la clase empresarial y los trabajadores organizados, se mezclaron con «viejos» problemas, tales como la «cuestión del Sur» y las desigualdades regionales. Se han efectuado intentos de modernizar las instituciones del Estado y la cultura política en varias fases del proceso desde finales de los sesenta hasta el presente. En general, sin embargo, la modernización ha sido desigual e incompleta. Analicemos, pues, el ciclo de crecimiento y modernización de forma más detallada.

El crecimiento económico de Italia en los años cincuenta y sesenta fue rápido, intenso y desigual. Estuvo estimulado por un conjunto de factores complementarios: en lo que se refiere a la oferta, por una explosión de energías empresariales —contenidas durante el período «proteccionista» fascista—, una fuerza laboral abundante, esforzada y técnicamente cualificada, que recibía salarios más bajos que los de los competidores extranjeros y oleadas subsiguientes de innovación tecnológica y de racionalización organizativa; en lo referente a la demanda, por una expansión de las exportaciones de productos italianos competitivos en un mercado internacional reconstruido y una mayor demanda interna debido al aumento de los sueldos y al creciente consumo de masas. El crecimiento económico fue apoyado, en un principio, por la reconstrucción de posguerra, la ayuda financiera de Estados Unidos, las políticas de recuperación del gobierno y por el crecimiento del mercado interno en lo concerniente a vivienda, infraestructura y bienes de consumo básicos, y más tarde por la gran expansión de posguerra de la economía internacional, la alta competitividad de las exportaciones italianas y la creciente integración de la economía italiana en el mercado europeo occidental, simbolizada por la firma del Tratado de Roma de las Comunidades Europeas en 1958.

El Producto Interior Bruto de Italia creció a un promedio del 5,5 % entre 1951 y 1958; en los «años del *boom*», entre 1958 y 1963, a una media del 6,3 % al año, y después de la corta recesión de 1964 de nuevo a un promedio de más del 6 % hasta la crisis del petróleo. Durante este período, los índices de inflación permanecieron bajos, y en 1961 la lira italiana ganó el premio concedido por el *Economist* a la moneda más estable. Se formó un creciente mercado nacional de productos industriales de consumo masivo; las importaciones y exportaciones excedían del 15 % del PIB. La inversión de capital fijo era aproximadamente de un 25 %, y crecía a un promedio del 14 % al año. El incremento anual promedio en el consumo de electricidad durante los años sesenta era del 8,4 %. En 1962, el desempleo estaba en un nivel más natural y normal del 3 %.

La estructura industrial de Italia consistía en unos pocos oligopolios, tanto privados como estatales, en los sectores energético, siderúrgico, químico, automotriz, electrónico (que favorecía unos elevados índices de acumulación), y una multitud de pequeñas empresas, algunas dependientes de las grandes para sus pedidos, aunque muchas otras desempeñaban un papel crecientemente independiente y agresivamente competitivo tanto en el mercado interno como en el extranjero.

Las tendencias macrosociales y culturales iban a la par con el crecimiento económico y la industrialización. Tuvieron lugar cambios básicos en la estructura de clases: una disminución de la población trabajadora —debido principalmente a un pronunciado descenso de las familias trabajadoras en la agricultura, un marcado incremento del número de obreros industriales y un crecimiento significativo de las clases medias, tanto de la dependiente como de la autónoma, en los sectores privado y público—, y una expansión igualmente significativa de la burguesía (empresarios en varios sectores económicos y profesionales del más alto nivel).

Los cambios más espectaculares fueron aquellos asociados a las emigraciones masivas. En lo que fue una verdadera revolución social, millones de familias emigraron del campo y de las ciudades pequeñas a las grandes ciudades, primero desde las regiones del nordeste al noroeste, luego del Sur al Norte y a Roma.

Desde 1959 a 1962, los movimientos de población anuales debido a emigraciones internas significaron un balance positivo de 180.000 personas para el noroeste y de 32.000 para la región central (sobre todo Roma) y un balance negativo de 122.000 para el Sur, de 35.000 para el nordeste y de 54.000 para Sicilia y Cerdeña. La mayoría de los emigrantes eran campesinos y agricultores minifundistas que dejaban el campo y tenían que enfrentarse a los nuevos desafíos del trabajo industrial y a las penurias y choques culturales de la sociedad metropolitana. A pesar de los costos sociales y psicológicos, el cambio en las vidas de millones de italianos pobres en el transcurso de unas pocas décadas fue asombroso. Por primera vez, la mayoría de los habitantes rurales pasaron a formar parte de la sociedad nacional y adquirieron la ciudadanía social mediante el acceso a bienes y servicios básicos, pese a las desigualdades existentes y a las que se producían en la nueva situación.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Italia y Francia tenían la proporción más elevada de población rural de todos los países occidentales. Cuarenta años después, Italia se había convertido en una nación fuertemente urbanizada, en la que la agricultura empleaba a unos dos millones de personas (8% de la pobla-

ción activa) y era responsable de solamente un 4% de la producción nacional. Este dramático éxodo desde el campo fue también en gran medida el responsable de la desaparición del campesinado. Durante siglos, los campesinos italianos habían tenido una vida difícil, debido a la existencia de latifundios de propiedad absentista (en las regiones del Sur), exceso de población y la falta de reformas agrarias (hasta los años de la posguerra el Parlamento italiano no aprobó una reforma agraria parcial). Hoy en día, la situación ha cambiado completamente. La mayoría de los agricultores minifundistas tienen valores, tipos de vida y patrones de consumo que no son significativamente diferentes de los de los habitantes de las ciudades. El mundo campesino y su cultura distintiva de tradicionalismo, religión, ahorros y autoridad de los padres de familia han desaparecido por completo.

El resultado de las emigraciones masivas y del éxodo rural fue el crecimiento de grandes zonas metropolitanas alrededor de Milán, Turín, Roma y Nápoles, y la aparición de serios problemas relacionados con la vivienda, los servicios sociales, el transporte y la calidad de vida. Durante siglos, Italia había sido en gran medida una sociedad urbana, en el sentido de una densa red de pueblos con rasgos diferentes y papeles diferentes en sus respectivas regiones. Por lo general, en el Sur las ciudades más grandes estaban habitadas por los terratenientes absentistas, una pequeña burguesía a su servicio y un *lumpen proletariado* dedicado a la lucha diaria por la supervivencia. Los pueblos a menudo eran sólo una suerte de ciudades dormitorio para los campesinos obligados a caminar muchos kilómetros cada día, ya fuera para trabajar como jornaleros o para trabajar sus pequeños campos. En las regiones norteña y central, las ciudades y los pueblos eran centros mucho más autónomos, productivos y culturales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia se hizo mucho más urbana. La población creció espectacularmente en número, diversidad social y heterogeneidad cultural. Se formaron zonas metropolitanas alrededor de las principales ciudades. Por ejemplo, la población residente dentro de los límites administrativos de Milán ascendió a 1,6 millones, pero la población de la zona metropolitana ascendió a 4,5 millones, y actualmente todos los días entran a Milán millones de no residentes para trabajar y hacer compras.

Mediante la creciente alfabetización y la expansión de la televisión, se formó una cultura nacional unificada. Pero lo realmente característico de Italia con respecto a otros países como Inglaterra y Francia, que se modernizaron antes que Italia, era que el proceso de urbanización fue en paralelo con una arraigada secularización de la cultura de masas (Graziano y Tarrow, 1979).

Las contradicciones y tensiones de un crecimiento industrial rápido e intensivo y del cambio social provocaron una oleada de conflictos sociales y de protestas masivas, primero en los años del *boom*, y luego, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta (desde las masivas huelgas de 1962 en Turín por la renovación de los contratos de los trabajadores del metal hasta el «otoño caliente» de 1969). Las protestas laborales se originaron por varios factores. En primer lugar, el poder de negociación de los trabajadores aumentó porque había casi pleno empleo en las principales zonas industriales del noroeste, lo cual, en la fase ascendente del ciclo económico, hacía a las empresas más vulnerables a la amenaza de huelgas. En segundo lugar, muchos trabajadores «industriales antiguos» se sentían alienados en la organización del trabajo taylorista-fordista de producción en masa, caracterizada por la fragmentación de tareas y el trabajo acelerado. Muchos trabajadores inmigrantes «nuevos», que tenían que adaptarse a condiciones de trabajo y de vida completamente diferentes en un medio industrial urbano, se sintieron desplazados y frustrados. En tercer lugar, el crecimiento económico provocó expectativas crecientes de más bienes de consumo y una búsqueda de mejores niveles de vida entre la mayoría de la gente.

La respuesta política al movimiento colectivo de los trabajadores industriales fue tibia: a corto plazo, las demandas sindicales de menos horas de trabajo y aumentos de sueldo fueron satisfechas, contribuyendo a crear una escisión en la clase empresarial entre los «oligopolios modernos» como Fiat y Pirelli, por un lado y, por el otro, los «viejos oligopolios» como las compañías eléctricas, que controlaban la mayor asociación de intereses empresariales (Confindustria), y eran seguidos por la mayor parte de las empresas pequeñas. Entonces, el Banco de Italia adoptó una política monetaria restrictiva a fin de reducir la inflación y la fuerza de los sindicatos.

Los primeros gobiernos de centro-izquierda propusieron un ambicioso programa de reformas, que sólo fue implementado parcialmente. Las reformas más importantes fueron la nacionalización de las compañías eléctricas, la reforma educativa, que estipulaba un alargamiento del período de escolarización obligatoria y la supresión de algunas barreras de clase para los logros educativos, y una reforma agraria con el doble objetivo de preservar el patrimonio natural e histórico de Italia y de otorgar al Estado —mediante un impuesto *ad hoc*— parte de la plusvalía de la tierra proveniente de la expansión urbana. Paralelamente, con la política antiinflacionista, estas reformas, aunque padecieron la oposición frontal de los grupos conservadores y fueron suavizadas gradualmente, durante un tiempo sirvieron para manejar los conflictos y para preparar el terreno para un período más tranquilo a lo largo de los años sesenta. De hecho, sin embargo, solamente postergaron el surgimiento de encarnizados conflictos.

Pocos años después, estallaron de nuevo las protestas masivas en un clima diferente y más favorable para la movilización de los trabajadores. El alcance de las transformaciones sociales y de las expectativas crecientes de las nuevas masas industriales urbanas —entre las que había miles de inmigrantes que sufrían los infortunios de la producción en masa y carecían de viviendas adecuadas y de servicios sociales— continuaron fomentando las contradicciones estructurales y los grandes conflictos sociales, que alcanzaron su ápice a finales de los sesenta y principios de los setenta.

Todos los factores que ayudan a explicar la oleada de protestas de los trabajadores en los años del *boom*, a comienzos de los sesenta (o sea, el fortalecido poder de negociación de los trabajadores en el mercado laboral en una fase ascendente del ciclo económico, la reacción contra la alienante organización del trabajo de la producción industrial en masa, la frustración y el choque cultural de los trabajadores inmigrantes jóvenes, las crecientes expectativas de un mejor nivel de vida), aún estaban presentes en 1968. A ellos se unió el clima cultural especial de ese año: el «efecto ola» de la protesta colectiva que estaba estallando en muchos países occidentales, y, más importante todavía, la revolución cultural en valores y comportamientos, el declive del sentido de autoridad y la generalización de las actitudes secularizadas, que hicieron que las autoridades tradicionales fuesen menos eficaces a la hora de mantener el respeto, precisamente en el mismo momento en que los conflictos laborales eran más encarnizados y la tensión social estaba en su punto álgido, debido a los costes sociales de la urbanización.

En este punto, durante el conflicto más intenso, el tercer paso en el ciclo de crecimiento y modernización —la respuesta institucional a la protesta colectiva por parte de los gobiernos y las elites políticas— demostró ser más débil que en otros países en vías de modernización. Se produjeron cambios en las relaciones laborales, con la aprobación en 1969 del «estatuto de los trabajadores». En los años setenta, se introdujeron cambios significativos en la legislación familiar y reformas más limitadas a la política industrial, al sistema escolar y a la sanidad nacional. Pero las fuerzas de la modernización eran débiles, atrapadas como estaban entre los guardianes del *statu quo* y la izquierda radical. Además, las estrategias del gobierno estaban generalmente faltas de visión y paralizadas por intereses e ideologías opuestas en la coalición gobernante. La vieja debilidad de los gobiernos de coalición italianos, con un primer ministro carente de autoridad tanto sobre los miembros de su gabinete (que o pertenecían a partidos diferentes o a facciones diferentes de su propio partido) como sobre las burocracias del Estado, se agudizó aún más.

Aparte de algunas reformas aisladas, aunque significativas, la principal respuesta institucional, como expondré más adelante, fue la utilización defensiva y políticamente distorsionada de la asistencia social de reparto de influencias, por parte de los partidos del gobierno, en un esquema de consenso interpartidario; esto es, se distribuían los beneficios asistenciales, tales como las pensiones de invalidez, pero no en respuesta a las necesidades reales, sino para obtener el apoyo de clientes políticos. En la esfera política, la ineficacia del gobierno dio paso a formas ilegales de acción política: primero, al terrorismo de sectores corruptos y renegados de los servicios secretos en alianza con la extrema derecha y, más adelante, al terrorismo de la extrema izquierda. La Mafia y la Camorra también crecieron espectacularmente como consecuencia de la debilidad del Estado y de la política de influencias corporativas, y en algunos casos se mezclaron con grupos terroristas en la denominada estrategia de la tensión, que apuntaba a desestabilizar las instituciones democráticas.

Las innovaciones más significativas, provocadas por las tensiones que conllevaba el crecimiento, y las acciones colectivas relacionadas las proporcionaron, como veremos, los actores principales de la sociedad civil, tales como empresas, familias, asociaciones y movimientos sociales, que desarrollaron sus propias estrategias para hacer frente al cambio.

LA TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN INCOMPLETA

Este estado de cosas hizo que las interpretaciones más actuales y famosas de la historia italiana reciente (véase Ginsborg, 1989; Graziano y Tarrow, 1979; Lanaro, 1992; Lepre, 1993; Salvadori, 1994; Scoppola, 1991) presentaran el caso italiano como un caso de modernización bloqueada o incompleta (o, más tajantemente, de modernización fallida), y que se quejaron de que el crecimiento impresionante y rápido de la economía y de la sociedad civil no estuvo acompañado por cambios institucionales adecuados y reformas gubernamentales. Por ejemplo, Tarrow resalta el impacto que tuvo en la modernización italiana la falta de una revolución burguesa y señala que en la Italia de posguerra la modernización de la educación, la cultura, la legislación y la administración pública no corrió a la par con el desarrollo económico (Graziano y Tarrow, 1979: 14). Lanaro (1992: 452; trad. mía) habla de una «modernización abandonada a su suerte» y de una «falta de gobierno que da como resultado un autogobierno incontrolable de grupos antiguos y de intereses creados», e indica que «la ausencia de gobierno es el verdadero problema de Italia, la incapacidad de la clase política para resolver incluso el problema más simple». Ginsborg (1989: 464; trad. mía) llama la atención sobre el «fracaso

de las reformas para contener los excesos del desarrollo no previsto», y sobre el hecho de que «las instituciones públicas nunca fueron modernizadas». Scoppola (1991, cap. 7) define el cambio italiano como «desarrollo sin dirección».

Estas interpretaciones hacen excesivo hincapié en rasgos objetivos del caso italiano. Estoy convencido, como lo están estos estudiosos, de que el notable crecimiento económico y la transformación social de Italia en décadas recientes no estuvieron acompañadas por una evolución paralela de las instituciones políticas y de la cultura política. Investigaciones empíricas sobre el mal funcionamiento de los servicios públicos en algunas regiones del país, la ineficiencia de amplios sectores de la burocracia estatal, el exceso de leyes, el bajo nivel de respeto por la ley por parte de la población y la debilidad de los valores cívicos proporcionan evidencias para estas interpretaciones. Además, la ruptura política de años recientes, junto a las investigaciones judiciales de corrupción política y el ritmo acelerado de reformas institucionales también se pueden interpretar como una consecuencia de la brecha demasiado ancha que existe entre la capa de transformación socioeconómica y la capa de innovación político-institucional. La colisión de estas dos capas, como las de las placas tectónicas que provocan un terremoto, produjo una ruptura.

Con todo, la tesis de la modernización incompleta puede ser seriamente criticada. En primer lugar, la palabra «incompleta» transmite la idea errónea de que se puede alcanzar una modernización plena de una vez por todas, cuando cualquier proceso histórico está abierto y nunca puede lograrse plenamente. En otras palabras, existe el riesgo de postular un modelo implícito de modernización con relaciones fijas y *a priori* entre el crecimiento económico y el desarrollo social, por un lado, y los cambios institucionales, políticos y culturales, por el otro, y de evaluar la experiencia italiana solamente en la medida en que se ajuste a este modelo abstracto, descuidando el hecho de que existen muchos caminos diferentes hacia la modernización. Esta actitud generalmente lleva a considerar el caso italiano como anómalo, con una sobrestimación de las diferencias y una subestimación de las acusadas similitudes con respecto a otros países occidentales y los procesos generales de convergencia entre ellos. Por consiguiente, es preferible hablar en términos de modernización irregular o desigual para recalcar los desequilibrios existentes entre los diferentes fenómenos, factores sociales y regiones.

En segundo lugar, mientras algunos de estos estudiosos consideran la «falta de gobierno» que dejó al proceso de desarrollo sin dirección como el producto de la falta de orientación y la inacción de las elites modernizadoras, se puede ver —al menos hasta cierto punto— más como el resultado de una estrategia activa y consciente desplegada por el bloque conservador [compuesto por los intereses

empresariales y la jerarquía de la Iglesia Católica, que estaban representados políticamente por el partido de la Democracia Cristiana (DC) y que tenían el respaldo de la política exterior norteamericana, y cuya meta era retrasar y adulterar el cambio y oponerse a las políticas reformistas.

Finalmente, estas interpretaciones tienden a enfatizar en exceso el papel desempeñado por las fuerzas sistémicas del cambio frente a las estrategias de acción. Cuando consideran las estrategias de acción, tienden a resaltar en exceso las de los actores colectivos a costa de los actores individuales. Por ejemplo, siempre que sus interpretaciones critican el desarrollo no previsto, tienden a pasar por alto las estrategias «planeadas» y conscientes de los actores individuales, tales como empresarios, trabajadores, consumidores y beneficiarios de la asistencia social. No quiero volver a la vieja controversia entre la perspectiva estructuralista y la orientada a la acción; simplemente indico que en mi análisis los dos planteamientos son complementarios en lugar de opuestos.

Los factores sociales —tales como las relaciones económicas, los valores culturales y las tradiciones, las normas legales y sociales, los factores políticos— son vistos como factores que constriñen las elecciones limitadas (elecciones con cierto grado de libertad) que llevan a cabo los actores individuales y colectivos. Por una parte, las condiciones estructurales —como los cambios y las contradicciones de un proceso de desarrollo— requieren que los actores obtengan resultados, y que los actores sean capaces de moldear y transformar las estructuras. Por otra parte, la acción racional tiene lugar dentro de un orden normativo: los actores están constreñidos por las estructuras y su libertad de elección está limitada no sólo por la interacción entre diferentes estrategias y por sus elecciones previas, sino también por las estructuras económicas y normativas existentes.

De acuerdo con esta perspectiva y para evitar la trampa de algunas interpretaciones actuales sobre la modernización italiana, nuestro análisis versará sobre tres conjuntos entrelazados de preguntas. Primero, ¿qué factores son más responsables de la desigual modernización? ¿Se debió más a la falta de dirección del proceso de crecimiento por parte de las elites modernizadoras (políticas, económicas y culturales) o al resultado de un exitoso proyecto conservador encaminado a conservar el poder de grupos sociales privilegiados y a controlar a los principales partidos? Sostengo que ambos factores fueron relevantes, además de la debilidad crónica del Estado italiano —que hizo que la implementación de las políticas de reforma fuera difícil de lograr—, y la influencia omnipresente de una cultura política de rebeldía y *trasformismo*, que contribuyeron a la derrota de las fuerzas políticas de orientación reformista.

Segundo, teniendo en cuenta el hecho de que Italia era un país dividido al término de la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente experimentó una profunda transformación económica y social, con unas respuestas por parte del gobierno más débiles y con más conflictos intensos que en otros países en vías de modernización —en los que tuvieron lugar procesos similares de crecimiento y oleadas de acción colectiva—, ¿cómo se manejaron las crisis y por qué la sociedad no se descompuso y el orden político no se desmoronó (a pesar de rasgos tan patológicos como el terrorismo y la corrupción generalizada)? Mi argumento es que el mercado, la familia y los partidos políticos fueron los principios organizadores fundamentales de la sociedad italiana, y que la religión y la comunidad desempeñaron un papel más limitado.

Tercero, dado que el crecimiento y la modernización tuvieron lugar en la Italia contemporánea —aunque en medio de agudas contradicciones y crisis recurrentes y a pesar de las fuerzas conservadoras—, ¿cuáles fueron los factores estructurales y los actores sociales responsables del cambio? ¿Podemos percibir un modelo de desarrollo específico en la transformación social de Italia de las últimas décadas? Sostengo que la sociedad civil fue más importante que el Estado y que las estrategias de los actores individuales con frecuencia resultaron más eficaces que las de los actores colectivos. De hecho, creo que la experiencia italiana demuestra que el papel del Estado en la modernización es menos importante de lo que habitualmente creemos.

Estos tres grupos de preguntas están claramente interrelacionados, ya que la integración social y el consenso político pueden lograrse a través del cambio y la innovación, y los mismos actores pueden ser tanto agentes del cambio como mecanismos de integración social.

MODERNIZACIÓN DESIGUAL Y EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA REFORMA

La desigual modernización de Italia (en otras palabras, el desequilibrio entre un gran cambio socioeconómico y una ligera transformación político-institucional) fue tanto el resultado de factores internos como externos. Ciertamente, las fuerzas conservadoras internacionales desempeñaron su papel: a veces, oponiéndose directamente al cambio y, más a menudo, favoreciendo indirectamente el *statu quo*. Entre ellas, con mucho los más prominentes fueron los gobiernos conservadores de Estados Unidos, a los que preocupaba cualquier cambio político significativo en un país que ocupaba una delicada posición «de frontera» en el blo-

que occidental en la era de la bipolaridad, y los círculos vaticanos conservadores, que se oponían a los movimientos de reforma dirigidos por los comunistas y se mostraban suspicaces con la modernización cultural que amenazaba los valores tradicionales y las relaciones sociales. Hubo excepciones significativas: tanto John F. Kennedy como el papa Juan XXIII inicialmente se opusieron a los primeros gobiernos de centro-izquierda, pero luego les favorecieron, incluso en contra de las opiniones de algunos de sus asesores.

Sin embargo, la modernización desigual se debía principalmente a factores internos: la fuerza de los grupos conservadores, la debilidad de las elites modernizadoras en la economía, la política y las instituciones culturales, y la ineficiencia del Estado civil. Los principales actores conservadores eran poderosos grupos con intereses personales —tales como los relacionados con la propiedad de la tierra y el negocio de la construcción, agricultores y comerciantes—, que apoyaban a los partidos conservadores o a las facciones en la coalición de gobierno. La mayoría de las empresas privadas y sus patronales también se oponían en general a las reformas. De hecho, el empresariado estaba dividido en cuatro sectores principales: *a)* los oligopolios tradicionales —como la industria eléctrica y las principales patronales relacionadas con el sector eléctrico—, que se oponían incluso a reformas muy leves; *b)* los modernos oligopolios, como la industria del automóvil y las industrias de bienes de consumo duraderos, que favorecieron el crecimiento de un gran mercado interno y que estaban, por tanto, dispuestos a aceptar incrementos salariales, además de relaciones industriales modernas y algunas reformas sociales, para una clase trabajadora en expansión y para los emigrantes del campo; *c)* las empresas controladas por el Estado, organizadas en las enormes compañías públicas IRI y ENI, que estaban más abiertas a la innovación en cuanto a la organización del trabajo y las relaciones laborales, y más dispuestas a cooperar con las estrategias industriales de los gobiernos, pero que también fueron progresivamente «colonizadas» por los partidos del gobierno; *d)* y la multitud de pequeños empresarios de primera generación, la mayoría de los cuales demostraron vigor, talento y unas notables habilidades empresariales, junto a una cultura política de pocas miras. El resultado global de las divisiones y diferencias entre los diferentes sectores empresariales era o bien una oposición frontal a las reformas o una tolerancia pasiva frente a los cambios más leves.

Un segundo factor, más importante, que explica la desigual modernización era la debilidad de las elites modernizadoras. Las elites italianas (incluso aquellas ideológicamente de orientación reformista) han sido fuertes y eficaces a la hora de perseguir sus metas particularistas, defendiendo sus intereses creados y reproduciéndose a sí mismas, pero con frecuencia han demostrado ser incapaces de cum-

plir una función de gobierno y desempeñar un papel hegemónico en la implementación de estrategias de interés nacional. Examinemos brevemente el papel de las elites políticas, de las elites económicas y de la intelectualidad.

Si uno define modernización en el sentido occidental de una cultura favorable al desarrollo de una economía de libre mercado y a la consolidación de una democracia representativa, uno debe advertir que las fuerzas de modernización siempre han tenido una ardua tarea en la política italiana, no sólo por la resistencia obvia de los intereses creados, sino también por la oposición cultural. Las dos subculturas políticas dominantes eran cuando menos ambivalentes con respecto a la modernización. Sectores significativos del mundo católico no eran anticapitalistas, pero estaban en contra de los valores y de las relaciones sociales de una sociedad industrial (se oponían al individualismo, al consumo masivo y a la secularización). La mayoría de los comunistas no eran anti-industriales, pero sí contrarios al Occidente capitalista y tenían sentimientos antinorteamericanos. Había políticos de orientación reformista en el partido católico (tales como Vanoni en los cincuenta y Fanfani en los sesenta), pero normalmente tenían que avenirse con fuerzas conservadoras más poderosas.

Había otros reformistas en la izquierda italiana, pero fueron obstaculizados por muchos factores: la rivalidad entre socialistas y comunistas y los problemas tradicionales de la izquierda italiana; el carácter rebelde de los principales movimientos de protesta, que a menudo planteaban demandas «innegociables» y negaban legitimidad al sistema político existente de democracia representativa, en lugar de competir dentro de las reglas aceptadas del juego; la cambiante estrategia del Partido Socialista, que exigía vehementemente reformas estructurales cuando se formó el gobierno de centro izquierda a principios de los sesenta (pero fue derrotado por la oposición conjunta realizada por fuerzas conservadoras y comunistas), y luego progresivamente suavizó sus demandas a cambio de una participación continua en el gobierno; la subordinación del Partido Comunista a la ideología soviética y a la política exterior, su falta de democracia interna y la brecha entre actitudes abiertas (revolucionarias) y encubiertas (*consensuales*) en su comportamiento político.

Generalmente, las elites políticas italianas fueron incapaces de fomentar una cultura cívica nacional o proporcionar una imagen del Estado con la que los ciudadanos se pudiesen identificar. La democracia estaba consolidada, pero usualmente los intereses individuales prevalecían sobre los intereses generales, y las identidades sectoriales, ya fueran ideológicas o locales, prevalecían sobre la identidad nacional.

En lo que se refiere a las elites económicas, arriba trato de las divisiones entre los principales componentes de la clase empresarial y de la relativa debilidad de los factores de modernización. Aunque las habilidades empresariales desempeñaron un papel básico a la hora de fomentar el crecimiento económico y el consumo de masas, como expondré a continuación, las elites económicas a menudo no actuaron como actores conscientes de la modernización. La burguesía italiana demostró ser menos capaz que sus equivalentes en otras sociedades occidentales de desempeñar el papel de clase hegemónica, esto es, enmarcar la defensa de sus intereses dentro de un proyecto más amplio de desarrollo nacional (Martinelli, 1979).

La burguesía italiana creció en un mercado ya dominado por otros poderes industriales y no se consolidó como clase hegemónica. Después del despegue industrial de finales del siglo XIX y comienzos del XX, los empresarios italianos se apoyaron mucho en una alianza con fuertes estados preindustriales y exigieron la protección del Estado. Sin embargo, el modelo tradicional en el que los empresarios proporcionaban apoyo político y financiero a los gobiernos autoritarios a cambio de la represión de las demandas de los trabajadores y de la protección frente a la competencia externa (un modelo seguido por el estado fascista) ya no era factible durante la transición a una sociedad industrial madura. Fue entonces cuando se sintió de veras la falta de una revolución burguesa en Italia, de la misma manera que se sintió la brecha entre el asombroso crecimiento capitalista y una clase burguesa débil, que carecía de confianza en sí misma y de la capacidad de institucionalizar valores democráticos liberales en el conjunto de la sociedad. La defensa más bien miope de los intereses creados por parte de sectores diferenciados de la elite empresarial tuvo el efecto global de debilitar la posición general de la burguesía y de crear las condiciones para conflictos más intensos a finales de los sesenta y comienzos de los setenta, cuando las huelgas y protestas laborales por parte de movimientos de estudiantes, ideológicamente anticapitalistas, y de mujeres tenían lugar a diario.

En décadas recientes, el crecimiento económico y el consumo masivo han podido con las actitudes antiempresariales. Veinticinco años después del «otoño caliente», los valores y las prácticas de la clase empresarial están plenamente legitimadas en la sociedad italiana. Pero el capitalismo italiano sigue siendo el coto vedado de un pequeño oligopolio de empresas controladas por familias, coordinadas por el mayor banco mercantil italiano (Mediobanca), un sector en declive controlado por el Estado y una galaxia de pequeñas empresas, dinámicas y de implantación regional, en busca de un mayor protagonismo político y de una representación política diferente. Y las elites económicas no gozan del prestigio o

desempeñan el papel destacado de sus equivalentes en otros países occidentales, por causa de su debilidad cultural tradicional y por su actitud ambivalente con respecto a la política: una mezcla de deferencia y aversión por los que están en el poder.

Las decisiones normativas generalmente son percibidas sólo como limitaciones y cargas a evitar, incluso quebrantando la ley, como muestran las recientes investigaciones judiciales sobre la implicación de grandes empresas en la corrupción política. Esta implicación no ha contribuido precisamente al prestigio de la elite económica, pero también ha provocado una respuesta positiva en forma de un mayor interés por la ética de los negocios y por la responsabilidad civil de los empresarios frente a la opinión dominante según la cual mientras los empresarios y los gerentes obtengan beneficios, están cumpliendo con sus responsabilidades sociales.

Finalmente, los valores y actitudes de modernización fueron defendidos solamente por una minoría de intelectuales. Varios factores conspiraron contra la difusión de una cultura moderna basada en la democracia y el mercado entre los intelectuales y en el sistema educativo. Los más importantes fueron, en primer lugar, la antes mencionada fuerza de las ideologías dominantes (católica y marxista), que o bien desconfiaban o se oponían abiertamente a los valores de una sociedad industrial moderna en nombre del comunismo o del antimodernismo. En segundo lugar, estaba la división entre las «dos culturas» (humanística y científica) y el abandono generalizado de la ciencia empírica y de la educación tecnológica entre los intelectuales. En tercer lugar, estaba el alejamiento de las escuelas y universidades de la economía, que explicaba la naturaleza abstracta y obsoleta de la mayoría de los programas escolares y que, junto al abandono de la ciencia empírica, también explicaba la penuria de la investigación científica en las universidades italianas. En cuarto lugar, estaba la falta (con sólo unas pocas excepciones) de instituciones educativas explícitamente dedicadas a la formación de elites, similares a las *grandes écoles* francesas o a los colegios públicos británicos. Por último, estaba el carácter fuertemente ideológico del debate público, en el que la falta de independencia de muchos periodistas también contribuyó al crecimiento insuficiente de una cultura cívica de los derechos y obligaciones de la ciudadanía. De hecho, la deficiencia más grave de los intelectuales italianos y de las instituciones culturales —por encima de todas, el sistema escolar— sigue siendo la incompleta educación cívica del pueblo italiano.

Mi argumento en lo concerniente a la debilidad de las elites modernizadoras no debería transmitir una imagen de la Italia contemporánea como una socie-

dad estática. Por el contrario, en décadas recientes se ha desarrollado un notable grado de movilidad social, en el que han participado incluso los sectores más altos de la sociedad. A pesar del gran número de empresarios de primera generación exitosos, sin embargo, la élite industrial tradicional —con algunas pérdidas y unos pocos recién llegados— ha mantenido su posición y su carácter oligopolista, con la ayuda de instituciones financieras como Mediobanca.

Junto al éxito en los negocios, la política ha sido la segunda mayor vía de movilidad social hacia la élite, tanto para los miembros del Parlamento como para los directores y profesionales apoyados por un partido. Estos grupos sociales conectados han adquirido progresivamente los rasgos de una *nomenklatura*, debido a la falta de alternancia política. También por estas razones las visiones modernizadoras deliberadas han sido inusuales y no generalizadas entre los miembros de las viejas o nuevas elites.

El tercer y más importante factor de la desigual modernización de Italia fue el atraso crónico del Estado civil italiano y lo intrincado del sistema legal, que retrasaba o hacía imposible la implementación eficaz de varias reformas. El atraso del Estado iba acompañado de una legitimidad limitada de la autoridad del Estado no sólo entre las minorías rebeldes, sino también en grandes zonas del Mezzogiorno, el Sur, donde el *«familismo amorale»* y organizaciones criminales como la Mafia y la Camorra compiten con el Estado por la lealtad de las personas.

El Estado italiano es débil en el doble sentido de una débil legitimidad entre los segmentos de la población y de una administración fragmentada, con escasa comunicación entre sus diferentes departamentos y con políticas incoherentes. La burocracia del Estado era el sector en el que la continuidad con el régimen autoritario precedente era más fuerte: en 1973, el 95% de los burócratas principales habían sido contratados antes de 1943 (Putnam, 1993), y a muchos de ellos les resultaba difícil identificarse con un estado democrático y aceptar los valores y prácticas de una democracia representativa. El relevo generacional redujo un tanto las actitudes autoritarias, pero otros factores conspiraron contra una administración eficiente y eficaz.

El Estado civil está compuesto principalmente por burócratas de las zonas del Sur con altos índices de desempleo, donde un empleo estatal es la única oportunidad a su alcance. La selección de altos funcionarios no se efectúa a través de escuelas específicas y, a menudo, ha estado influenciada por la filiación partidista. Las carreras profesionales se hacen sobre la base de la antigüedad en vez del mérito. El Estado civil está dividido en departamentos y los funcionarios tienen limita-

das oportunidades de cambiar de un departamento a otro (Cassese, 1992). La formación educativa de la mayoría de los burócratas era la escuela de derecho y la actitud predominante era la aplicación rígida de las normas y los procedimientos sin preocuparse de los resultados. La estricta división de papeles y competencias tiende a fragmentar el proceso de toma de decisiones y a retrasar las decisiones mediante el frecuente uso del veto.

La cultura burocrática no está muy abierta a la innovación en general, pero las actitudes conservadoras son particularmente fuertes en la burocracia italiana. Indicadores de la falta de eficiencia y eficacia de la burocracia italiana son el número de leyes que no se implementan y los *residui passivi*, o sea, los recursos financieros asignados para un propósito determinado que regresan a las arcas del Estado porque no son gastados en su momento. Ejemplos típicos de esto último son los subsidios concedidos a las regiones del sur y el uso limitado de los créditos de la Unión Europea para la modernización agrícola y el desarrollo de las zonas subdesarrolladas. Sin embargo, la no-implementación de las leyes de reforma es un problema más serio aún.

Incluso entre los gobiernos de orientación reformista —como los gobiernos de centro-izquierda de los sesenta, los gobiernos de «solidaridad nacional» de finales de los setenta y los gobiernos de «emergencia» de años recientes (desde el gobierno de Amato de 1992)—, la implementación normativa fue difícil, no solamente a causa de conflictos entre los diversos miembros de la coalición de gobierno, sino, sobre todo, a causa de las limitaciones de la burocracia estatal en términos de eficiencia y de eficacia.

La ineficiencia e ineficacia ayudan a explicar, junto a la existencia de un Partido Comunista fuerte, por qué, en la democracia italiana, las fuerzas de izquierda siempre han tenido dificultades a la hora de implementar sus estrategias de cambio. De hecho, mientras la derecha política confía más en las espontáneas fuerzas del mercado y de la sociedad, que sólo requieren una dirección gubernamental limitada, la izquierda política tiende a pensar que la sociedad sólo se puede cambiar deliberadamente y que únicamente se puede moldear mediante políticas de reforma conscientes y progresistas, que requieren un aparato del Estado eficaz. Mientras más ineficaz es el gobierno, más difícil es que desempeñe su papel. Esto puede contribuir a explicar por qué Italia tiende a tener gobiernos con políticas de derechas y retóricas de izquierda.

La experiencia italiana también muestra que el Estado no es el primer motor del desarrollo y de la modernización. Las relaciones sociales y las actitudes

culturales han cambiado profundamente en Italia, pese a la limitada eficiencia de las políticas de reforma deliberadas y la poca eficacia de las instituciones del Estado.

Las escasas eficiencia y eficacia de la burocracia estatal también contribuyeron al fracaso parcial de las dos tentativas de usar «gobiernos intermedios», territoriales o funcionales, como una forma de superar la crisis de gobernabilidad —un mal general de las democracias liberales de los setenta—, como hicieron otros países tales como España (Pérez Díaz, 1993: 185). Ambas tentativas fueron la creación de regiones, a comienzos de los setenta, y los acuerdos neocorporativos entre empresas, trabajadores y gobierno y la formación de la política pública a comienzos de los ochenta.

De acuerdo a la teoría del «gobierno sobrecargado», a los gobiernos se les plantean cada vez más exigencias sin que éstas sean filtradas de forma eficaz por parte de los actores políticos. Esto, a su vez, reduce la eficacia política de los gobiernos (su capacidad para resolver problemas básicos) y, por tanto, su legitimidad. En esta situación, hay dos maneras de incrementar la gobernabilidad global de un país: la descentralización regional, que logra una división del trabajo administrativa entre el centro y la periferia, acerca más algunas de las decisiones del gobierno a los ciudadanos comunes y hace a los encargados de formular las políticas más responsables ante los contribuyentes; y delegar la autoridad en los sindicatos y en las asociaciones empresariales a cambio de determinar conjuntamente las políticas económicas y laborales.

Las estrategias de co-determinación y los pactos neocorporativistas requieren una representación unificada de los principales actores colectivos y un Estado fiable y eficaz que garantice los pactos. En Italia, no había ni un movimiento sindical unificado ni una patronal unificada. Los diferentes sindicatos estaban vinculados a los grandes partidos políticos, algunos en el gobierno y algunos en la oposición. Las asociaciones patronales estaban divididas entre empresas privadas y las controladas por el estado, y entre empresas grandes y pequeñas. De hecho, los gobiernos de coalición débiles frecuentemente fueron los primeros en romper los acuerdos subiendo los salarios de los empleados públicos por encima del nivel salarial pactado.

Así pues, no ha de sorprender que los acuerdos neocorporativistas apenas pudiesen tener lugar en Italia, con la excepción parcial de comienzos de los ochenta y los gobiernos de Amato y Dini en los noventa. En 1983, el gobierno llegó a un acuerdo con los tres principales sindicatos y la principal asociación patronal para

modificar el sistema de indexación salarial, reducir las horas de trabajo, parar las negociaciones salariales durante dieciocho meses y proporcionar incentivos a las empresas. El acuerdo, suscrito por un gobierno preelectoral débil con fuertes grupos de interés, convenció a los patronos y a los sindicatos para que hicieran concesiones, con compensaciones económicas otorgadas por el gobierno que empeoraron la carga financiera de un presupuesto estatal ya de por sí forzado. Un año más tarde el gobierno de Craxi firmó un acuerdo que redujo aún más el sistema de indexación salarial, pero con la oposición del principal sindicato de orientación comunista. Los acuerdos de co-determinación de los años noventa fueron de una naturaleza diferente: tanto el gobierno de Amato de 1992 (con su introducción de un tope en las negociaciones salariales) como el gobierno de Dini de 1995 (con su reforma parcial del sistema de pensiones) han podido convencer a los sindicatos para que moderen sus demandas a fin de controlar la inflación y reducir el déficit presupuestario.

La descentralización regional va en contra de una tradición consolidada en la administración estatal italiana. A pesar del «código genético» italiano de diversidad municipal y regional, los regímenes políticos que se han sucedido desde el nacimiento de la nación-estado italiana hasta el presente, siempre han tratado de imponer unas estructuras de estado centralista. La unidad nacional llegó tarde (en 1861) y, pese a los generosos esfuerzos y las buenas intenciones de las activas minorías que lucharon en el Risorgimento, el resultado fue en muchos aspectos decepcionante. El modelo de gobierno centralista y autoritario adoptado bajo la monarquía de los Saboya era débil en términos tanto de legitimidad como de eficacia política, y esencialmente demostró ser incapaz de crear un sentimiento fuerte de identidad nacional entre la mayoría de la gente. El patriotismo creció significativamente durante la Primera Guerra Mundial, especialmente en 1917, cuando la propia independencia del país parecía en peligro. Pero en los años de la posguerra, la incapacidad del gobierno de cumplir su promesa de distribuir tierras entre los campesinos pobres que habían luchado en la guerra, los agudos conflictos de clase entre trabajadores e industriales, y entre campesinos y terratenientes y la violenta confrontación entre socialistas y fascistas destruyó cualquier unidad que hubiese podido surgir a partir de la experiencia de la guerra de muchos italianos.

El fascismo, que intensificó el carácter autoritario y centralista del Estado para perseguir su estrategia antidemocrática, añadió la movilización de masas y la retórica nacionalista, pero ni construyó un Estado ni un sentido duradero de identidad nacional. Este régimen fue de hecho un gran fracaso: terminó en una guerra perdida, transformó Italia en un campo de batalla de ejércitos extranjeros, mostró el fracaso vergonzoso de toda una clase gobernante y dejó un país más dividido que nunca en una guerra civil.

Las elites políticas de la nueva Italia democrática, que lucharon contra el nazismo y el fascismo, querían borrar del mapa todos los restos del régimen fascista, la descentralización del Estado entre ellos, pero les preocupaban mucho las profundas divisiones territoriales, económicas e ideológicas del país y, por consiguiente, se abstuvieron de construir un estado verdaderamente descentralizado. La constitución democrática de 1948 de la nueva República italiana preveía una descentralización regional de los poderes. Esta no fue implementada hasta comienzos de los setenta y de una forma un tanto limitada. La principal razón de esto —aparte de la ideología del Partido Comunista de un estado central fuerte— era la oposición del principal partido de gobierno, la DC, que controlaba el aparato del Estado y había conseguido penetrar en la burocracia central y, por lo tanto, era muy reacio a delegar el poder real en los gobiernos regionales, que podían estar controlados por el principal partido de la oposición en zonas clave del país.

Una vez que se tomó finalmente la decisión, la creación de burocracias regionales fue vista por el gobierno y la oposición como una nueva oportunidad para repartir empleos y beneficios a partidarios y clientes. El resultado fue un incremento significativo del tamaño y de los costes de la administración pública, sin ninguna mejora significativa en la calidad del gobierno local o en la satisfacción de la creciente demanda de identidad local por parte de la gente. La descentralización regional había funcionado mejor para una parte limitada del país, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las regiones de *status* especial, creadas en las principales islas y zonas fronterizas, pudieron de hecho absorber y canalizar un volumen considerable de presión y descontento social. Pero a medida que pasó el tiempo, estas autonomías regionales se convirtieron en terreno fértil para la política de influencias de los grupos de poder, contribuyendo a generar enormes déficit públicos.

El Federalismo se ha convertido ahora en una de las cuestiones políticas más importantes y, aparentemente, goza de la aprobación de todas las fuerzas políticas principales (aunque cada una tiene una concepción un tanto diferente). Pero, por el momento, el estado italiano sigue siendo débil y centralizado, pues adolece de los aspectos negativos de la descentralización, tales como indiferencia hacia las autonomías regionales e identidades locales e injusticia fiscal, pero carece de los positivos, tales como la eficacia en la toma de decisiones, competencia burocrática y espíritu de cuerpo. Recientemente han sido introducidas algunas reformas tendientes a una política fiscal más descentralizada, pero sigue habiendo muchos ejemplos de descentralización estatal de funciones a costa de las autonomías territoriales.

PRINCIPIOS ORGANIZADORES DE LA SOCIEDAD ITALIANA: LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL MANEJO DE LA CRISIS

Si bien es verdad que el Estado en Italia, aunque grande y omnipresente, es débil por el pobre desempeño y la escasa eficacia de las políticas públicas, y que las elites modernizadoras son débiles y carecen de capacidad hegemónica, hay que responder a otras dos preguntas relacionadas: en primer lugar, cómo se garantizó la integración social en un contexto de profundas divisiones sociales y de cambio rápido y tumultuoso; y cuáles fueron los principales actores en la profunda transformación que tuvo lugar.

En el medio siglo que separa la Segunda Guerra Mundial y el presente, la sociedad italiana tuvo que hacer frente a dos serios retos: en primer lugar, a las traumáticas experiencias de la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil y la transición política desde el fascismo a la democracia; en segundo lugar, al extraordinario crecimiento económico y a la transformación social, con marcadas contradicciones, una gran cantidad de conflictos añadidos y crisis recurrentes.

Cualquier estudio de la transformación de una sociedad concreta debe plantearse la pregunta sociológica fundamental del orden social, es decir, la pregunta de Simmel «¿Cómo es posible la sociedad?» ¿Cuáles son los mecanismos básicos que permiten la integración de los individuos en una sociedad y garantizan la continuidad a través del cambio, dado que los miembros de una sociedad, por un lado, están «obligados» a cooperar en pos de objetivos comunes y, por el otro, compiten los unos con los otros por recursos escasos y bienes deseables? ¿Cuáles son los modos básicos de regulación social que coordinan las actividades y las relaciones sociales, se encargan de los conflictos y distribuyen recursos y recompensas?

A la luz de las tres formas básicas de regulación social —intercambio, autoridad y solidaridad—, sostengo que la regulación de la sociedad italiana tuvo lugar mediante una mezcla de estas formas de mecanismos institucionales relacionados: las fuerzas del mercado, las organizaciones políticas (mayoritariamente partidos políticos) y las instituciones de la comunidad (principalmente la familia y, en menor grado, la Iglesia). El «patriotismo de la constitución» —la solidaridad entre los actores sociales y políticos que edificaron el nuevo estado democrático— desempeñó un papel más limitado. Pero tanto el factor religioso como el factor constitucional ejercieron su influencia en gran medida, aunque no completamente, a través de los partidos políticos. De hecho, el catolicismo estaba detrás de una de las dos subculturas políticas hegemónicas, mientras que la lealtad hacia el pacto constitucional se basaba en una alianza de partidos antifascistas que cooperaron en su lucha contra las tropas de ocupación nazi y sus aliados fascistas.

La relativa importancia de estos principios e instituciones cambió a través del tiempo y en relación a dos conjuntos diferentes de desafíos a los que la sociedad italiana tuvo que hacer frente. A medida que el papel del mercado se hizo más importante y los partidos políticos consolidaron su penetración en el Estado, el papel de las instituciones tradicionales —la familia extensa, la comunidad local y la parroquia— disminuyó. Sin embargo, estas instituciones mostraron capacidad para adaptarse al cambio y para ser ellas mismas actores del cambio.

LAS DIVISIONES DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE POSGUERRA Y EL DESAFÍO DE LA UNIDAD NACIONAL Y DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Al término de la guerra, y ochenta y cinco años después de su nacimiento como una nación-estado unificada, Italia era un país profundamente dividido debido a su heterogéneo «código genético» —que hizo difícil la construcción nacional— y al legado de una guerra civil. Además, la incapacidad de las elites políticas para integrar a las masas mediante un estado democrático, y la de las elites económicas para integrar a los trabajadores por medio de una economía de mercado desarrollada, contribuyó a crear agudas desigualdades económicas, profundas divisiones sociales y una cultura política polarizada.

En primer lugar, había casi un siglo de fragmentación en una multitud de regiones y pueblos. Cuando nació la nación-estado italiana, menos de un siglo antes, Italia estaba dividida en cinco entidades políticas principales y unos cuantos estados menores. Junto a esta fragmentación, estaba la tradicional diversidad cultural de los «miles de campanarios». Tomando la lengua hablada como un indicador mayor de esta diversidad, merece la pena recordar que hasta la Segunda Guerra Mundial, el italiano era fundamentalmente una lengua escrita para las elites instruidas y, hasta los años sesenta, la mayoría de la población hablaba otras «lenguas menores» o dialectos. Incluso hoy en día hay trece «lenguas menores» y doce dialectos. A pesar del impacto homogeneizador de la educación obligatoria y la televisión, el 14% de la población sólo habla una lengua menor o dialecto, mientras que el 60% sabe una. La fragmentación y la diversidad cultural históricamente han sido una fortaleza y una debilidad del país: fueron una fuente mayor de orgullo e identidad local y un rico caldo de cultivo para un gran arte y artesanía, pero también fomentaron las rivalidades generalizadas y debilitaron al país, facilitando de esta manera la dominación extranjera de una gran parte de éste.

En segundo lugar, había divisiones políticas e ideológicas, la más importante de las cuales era la división entre la mayoría, que o bien no habían apoyado

al régimen fascista o lo habían rechazado cuando se hizo evidente que éste era el responsable de la tragedia nacional —que incluía una significativa minoría de aproximadamente 100.000 partisanos que lucharon en el movimiento de resistencia—, y la minoría de los fascistas más o menos disfrazados. Además, las actitudes políticas de la propia mayoría antifascista se dividían entre católicos y no católicos, liberales y marxistas, conservadores y progresistas, socialistas y comunistas. También existía una división entre los monárquicos y los republicanos, que culpaban al rey por sus responsabilidades en la aceptación de la dictadura de Mussolini y de la guerra.

Finalmente, había dualismos económicos y sociales entre el Norte y el Sur y entre las ciudades y el campo. Aún en 1954, de acuerdo a una investigación parlamentaria sobre la pobreza, el 85 % de las familias pobres vivía en las regiones del Sur y la renta per cápita era 3,5 veces más alta en el Piamonte que en Calabria. La sociedad italiana estaba también marcadamente estratificada: había grandes diferencias en los niveles de renta, condiciones de vida, valores culturales, estilos de vida y patrones de consumo entre la burguesía y los obreros, entre campesinos y oficinistas y entre artesanos y funcionarios del Estado.

El resultado de todas estas escisiones era una nación profundamente dividida y una población con una débil identidad nacional. La idea misma de «nación» había sido distorsionada por el régimen fascista. El nacionalismo patriótico había sido transformado en el nacionalismo agresivo de Mussolini. Existía una gran brecha entre la retórica oficial de recreación de los triunfos de la Roma Imperial y la realidad de una elite gobernante irresponsable que terminó, vergonzosamente, su reinado en el dramático verano de 1943, cuando toda la organización del Estado se desmoronó. La monarquía era también una institución desacreditada, ya que había favorecido al régimen autoritario y había demostrado ser incapaz de conducir al país en los tiempos difíciles, perdiendo así la oportunidad de recuperar su prestigio.

El movimiento de la resistencia en el Norte —donde la ocupación nazi había durado más y la lucha contra el fascismo había sido más ardua—, y los gobiernos de unidad nacional en las regiones controladas por tropas británicas y norteamericanas, ayudaron a fomentar una confianza y un respeto mutuos entre los partidos políticos democráticos recién nacidos (o renacidos), y a legitimarlos como los actores sociales emergentes principales, que —junto a las instituciones tradicionales como la familia extensa, la Iglesia y la comunidad local— aunaron esfuerzos para mantener al país unificado.

Sin embargo, al término de la guerra la situación era tan desesperada que uno se podría preguntar por qué el país no se dividió, ya fuera en términos político-ideológicos (mediante una continuación de la guerra civil) o en términos regionales (mediante el crecimiento de movimientos independentistas como el separatismo siciliano). Para responder a esta pregunta, uno debe considerar el efecto combinado de varios factores.

En primer lugar, la división del mundo entre las tres potencias ganadoras en Yalta colocó a Italia dentro de la esfera occidental de influencia, fijó límites claros al abanico de opciones políticas disponibles y estimuló el realismo político entre los partidos italianos de izquierda, que no querían enzarzarse en una lucha armada y repetir la trágica experiencia de la guerra civil griega.

En segundo lugar, estaba el legado del movimiento de resistencia, que se convirtió en un factor clave para romper con el pasado autoritario y para sentar las bases de la nueva Italia. Construyendo sobre los fuertes lazos y sentimientos de solidaridad desarrollados en la lucha común, los partidos antifascistas de diversas inclinaciones ideológicas mostraron un notable espíritu de cooperación a la hora de redactar la nueva constitución. El resultado de los dieciocho meses de trabajo de la Asamblea Constituyente elegida en junio de 1946 fue un acuerdo razonable entre las tres subculturas políticas principales, la católica, la marxista y la liberal. Los valores e instituciones de la libre empresa fueron ratificados, junto a la solidaridad e igualdad de oportunidades. La confirmación del *status* privilegiado de la Iglesia Católica fue acompañada del reconocimiento de las instituciones del movimiento de los trabajadores. Todos los derechos básicos y libertades civiles limitadas, o completamente negadas, por el régimen fascista fueron solemnemente ratificadas y garantizadas.

En lo que se refería a la estructura constitucional, la constitución era demasiado proclive a favorecer las garantías y controles de la oposición a expensas de la eficacia del gobierno, tanto porque la experiencia fascista llevó a poner énfasis en los derechos constitucionales y controles democráticos como porque, dado el incierto resultado de futuras elecciones, a cada partido grande le interesaba garantizar y recalcar el papel de la oposición. A pesar de este desequilibrio, y aunque algunos puntos vitales fueron implementados lentamente —como el concerniente a los gobiernos regionales—, la constitución fue un logro importante, que contribuyó a una transición tranquila a la democracia y fomentó la unidad nacional por medio del «patriotismo de la constitución».

En tercer lugar, estaba el papel desempeñado por las instituciones tradicionales, principalmente la familia y la Iglesia. La familia y la parroquia de la comu-

nidad eran instituciones fundamentales en un país donde la mayoría de la población aún vivía en el campo y en pequeños pueblos. Su influencia aumentó durante los años de la guerra cuando, en tiempos de penuria y dolor, después de que la autoridad estatal se colapsara y se propagaran las relaciones *anómicas*, a muchos les parecían ser los únicos refugios seguros.

La Iglesia y la familia fueron también dos contribuciones clave para el éxito político del partido de la Democracia Cristiana. Los valores religiosos tenían una profunda aceptación entre los campesinos, las clases medias y las mujeres, los grupos sociales entre los que la Democracia Cristiana obtenía una mayor aprobación. Fue en representación de la familia y de la religión como este partido construyó su estrategia de trascender los conflictos de clase en nombre de una identidad religiosa común (interclasismo). Pero la importancia de estas instituciones iba mucho más allá de su impacto en la política italiana. La familia era el punto de solidaridad y asistencia mutua más importante y, como explicaré a continuación, demostró ser particularmente resistente, si se tienen en cuenta los desafíos sociales de la modernización y, de hecho, fue más un factor de cambio que de conservadurismo.

La Iglesia Católica era una institución compleja que desempeñaba múltiples papeles. En Italia, «Iglesia» quería decir cosas diferentes: la extensa red de parroquias y la burocracia del vaticano, las poderosas órdenes religiosas y el entramado de asociaciones católicas activas en la vida diaria, los valores y códigos morales de la conducta social procedentes de la enseñanza religiosa y de las experiencias de los individuos de la comunidad de creyentes. Después del acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el estado bajo el Concordato de Mussolini en 1929 (los Pactos Lateranenses), según los cuales las instituciones católicas estaban reconocidas por el fascismo (y actuaron hasta cierto punto como competitivas instituciones socializadoras), la religión católica se convirtió en asignatura obligatoria en las escuelas, y el fascismo obtuvo una mayor aprobación entre las masas católicas.

Con la atmósfera democrática de la posguerra y la constitución de 1948 —que confirmó el Concordato de 1929—, la Iglesia Católica tenía mucha más libertad para establecer una poderosa red de organizaciones paracatólicas, en un intento por incrementar su influencia en varios sectores de la sociedad. Al contrario que en Francia, donde las organizaciones paracatólicas fueron más fuertes en los años veinte y treinta, en Italia experimentaron una expansión y fuerza máximas en los años de la posguerra. Trabajadores, campesinos y la juventud fueron los blancos clave de organizaciones específicas bajo la organización matriz Acción Católica.

La influencia de la Iglesia, ejercida tanto por las parroquias como por las organizaciones paracatólicas, iba desde la socialización de niños en los *oratori* a la

recomendación de trabajadores píos y moderados a los empresarios, desde el control normativo del comportamiento sexual a la censura de películas y libros «escandalosos», desde el suministro de servicios de asistencia social a través de organizaciones benéficas a la asistencia hospitalaria, desde la influencia política en los partidos, sindicatos y patronales católicas (CISL, ACLI, *Coltivatori Diretti*, etc.) a la lucha ideológica contra el ateísmo comunista. Esta influencia omnipresente, caracterizada tanto por los elementos «positivos» de la tradición de amor cristiano como por los elementos «negativos» de un control normativo de la religión del Estado, llegó a la mayoría de los italianos, incluso a muchos que votaban por partidos de izquierda, y fue un factor fundamental de la integración social.

El último factor importante en la integración social eran los partidos políticos. Estaban legitimados por su papel en la lucha contra el fascismo y encontraron en las instituciones democráticas un terreno fértil para un crecimiento vigoroso. Los tres partidos más grandes —la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Socialista— demostraron ser muy eficaces a la hora de obtener un consenso de masas mediante el adoctrinamiento ideológico, la acción de poderosas organizaciones partidistas y la influencia ejercida por fuertes movimientos colectivos y sus asociaciones afines, como el movimiento campesino, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones patronales, las asociaciones de pequeños agricultores (*Coltivatori Diretti*, y *Federterra*) y las asociaciones de mujeres (como la UDI, de orientación comunista) .

Tanto los grandes partidos como los pequeños partidos centristas —el más importante de los cuales era el Partito d'Azione (Partido de Acción)— representaban a grandes agrupaciones sociales y expresaban subculturas políticas fundamentales. Ellos firmaron el pacto constitucional de la nueva República. Aunque competían fieramente unos con otros, institucionalizaron los nuevos valores y prácticas democráticas y consiguieron el consenso necesario para la recuperación económica y la estabilización política.

Las razones de la especial fuerza de los partidos políticos eran internacionales e internas. En el clima de la Guerra Fría y en un país frontera como Italia, se produjo una batalla a muerte entre ideologías alternativas y modelos opuestos de individuos y sociedad, y los partidos demostraron ser los instrumentos más efectivos en este conflicto.

Pero también había factores internos básicos: los partidos políticos eran los protagonistas de la nueva Italia y pudieron llenar el vacío dejado por el colapso de las instituciones fascistas y el fracaso de las elites tradicionales. Estaban alimenta-

dos por la recién nacida y pujante democracia. Aunque un movimiento antipartidos, el *Uomo Qualunque* (el hombre común), fundado en 1946, obtuvo algo de apoyo electoral, fundamentalmente en el Sur (casi un 7% en las elecciones generales de junio de 1946, pero casi el 50% en Bari en las elecciones locales de noviembre de 1946), la inmensa mayoría de los italianos deseaban una política democrática, se identificaban con los líderes prestigiosos y se movilizaban fácilmente tanto por grandes ideales como por las cuestiones básicas.

Las titánicas tareas de reconstruir el país y edificar las instituciones de la nueva democracia dieron a mucha gente un sentimiento de misión común. Y una generación de líderes políticos y militantes capaces y dedicados ayudó a aumentar el prestigio de los partidos y a formar identidades colectivas. Tras más de una década de duro trabajo, de ingenio empresarial, de virulentas disputas políticas, de violentos conflictos políticos, de penurias y sacrificios, tanto la transición política hacia la democracia como la industrialización de la economía estaban por fin en marcha.

EL DESAFÍO DEL DESARROLLO Y LA MODERNIZACIÓN

A finales de los años cincuenta, el primer desafío había sido encarado. Italia presentaba una imagen ambigua: los problemas más serios de la posguerra estaban definitivamente resueltos, pero aún distaba de ser un país desarrollado. La mayoría de los italianos disfrutaba de un bienestar económico y una seguridad personal moderadas y tenían esperanzas de que las cosas mejoraran todavía más. En el plano social, la nación italiana ya estaba en proceso de formación, aunque la fragmentación y la división tradicionales no habían desaparecido.

Si uno compara este estado de cosas con la coyuntura italiana al término de la guerra, el alcance y la calidad del cambio eran bastante notables. Con todo, los problemas sociales como la mortandad infantil, el analfabetismo, la falta de unos servicios sociales básicos y una vivienda digna y el desempleo aún no estaban ni mucho menos resueltos, en especial en el Sur y en las zonas rurales. Cientos de miles de italianos tenían que buscar trabajo en el extranjero, pero todavía más estaban emigrando desde el campo en el Sur y en el nordeste hacia Roma y las grandes ciudades industriales del noroeste.

El desafío del desarrollo y la modernización fomentaron nuevas tensiones y conflictos, que fueron más agudos si cabe por el legado de ineficiencia del Estado italiano y la debilidad de las elites nacionales. Las esperanzas de un profundo cambio social y de una democratización de los aparatos del Estado puestas en el

movimiento de resistencia no se hicieron realidad. Pese a todo, bajo la hegemonía del partido de la Democracia Cristiana, la normalización social y la estabilización política habían triunfado y todas las condiciones previas básicas para el desarrollo económico ahora estaban presentes.

Los principios organizadores básicos y las instituciones integradoras de la sociedad italiana durante la normalización social y la estabilización política de los cincuenta habían sido los partidos políticos, la familia y la Iglesia. Con el crecimiento económico y la modernización, otro actor institucional, el mercado, con su lógica de creciente productividad, competitividad y consumo masivo, obtuvo un papel muy importante. Las instituciones tradicionales o bien decayeron (la parroquia y la comunidad local) o se transformaron (la familia). La Iglesia mantuvo una fuerte influencia, aunque se doblegaba ante los retos de la secularización. Los partidos políticos extendieron su poder e influencia hasta el punto de que controlaban instituciones clave, tales como bancos, empresas estatales, instituciones sanitarias y cadenas de televisión del Estado. Los sindicatos y las patronales también se convirtieron en unos actores más poderosos, y su papel se puede entender mejor a propósito de la estrategia y organización de los principales partidos políticos. Otros grupos de interés organizados, asociaciones de voluntarios de diversa índole y los medios de comunicación de masas también desempeñaron un papel crecientemente significativo. Los partidos políticos dominaban la esfera pública, definiendo objetivos comunes, construyendo lealtades colectivas y distribuyendo recursos en una suerte de asistencia social de reparto de influencias. La familia dominaba la esfera privada, desempeñando varias funciones, como una especie de núcleo de las relaciones sociales. El mercado en expansión era la fuente del creciente bienestar económico, y fomentaba la integración de los individuos a través del consumo en masa. Los valores, las instituciones religiosas y las comunidades locales continuaron siendo relevantes, pero su papel menguó en proporción al aumento de la importancia del crecimiento económico, el consumo masivo y la secularización.

Trataré en la siguiente sección (sobre actores del cambio social) del papel de los grupos de interés, de los movimientos sociales, del mercado y de la familia. Ahora me centraré en la Iglesia y los partidos políticos como factores básicos de integración social (la distinción no implica, por supuesto que el mercado y la familia no hayan sido también factores de integración social y que los partidos políticos y la Iglesia no hayan sido actores del cambio).

La Iglesia Católica continuó desempeñando un importante papel en la sociedad italiana más allá del ruedo político, pero la secularización —que conllevaban el crecimiento y la modernización— cambió radicalmente el contexto de su

acción y limitó hasta cierto punto su influencia. Los nuevos desafíos a que se enfrentaba la Iglesia en una sociedad crecientemente secularizada suscitaron la tradicional controversia entre conservadores e innovadores y, con el Papa Juan XXIII, estimularon las audaces respuestas del Concilio Vaticano II en materia de doctrina religiosa y disposiciones institucionales. En décadas recientes, las vocaciones religiosas, la asistencia a misa y las devociones privadas han disminuido sin cesar. Sin embargo, la secularización no ha supuesto el distanciamiento de las personas inactivas religiosamente de su herencia religiosa. La tradición religiosa de la familia ha sido, y aún es, un componente principal de la identidad personal. Los matrimonios religiosos y las misas de funeral todavía están más generalizadas en Italia que en otras sociedades católicas desarrolladas. Y la Iglesia aun dice, como en el pasado, ejercer su autoridad moral sobre todos los ciudadanos. Además, las asociaciones de voluntarios vinculadas a la Iglesia —ya sean estrictamente devocionales, de orientación benéfica o educativas— constituyen una enorme y compleja red que contribuye a la integración social y a las identidades colectivas.

De hecho, las asociaciones de voluntarios —tanto las vinculadas a la Iglesia como las laicas— son otro mecanismo que ayuda a unificar a la sociedad italiana. De acuerdo con un estudio nacional reciente (Tomai, 1994), millones de Italianos son miembros de asociaciones de voluntarios de algún tipo y varios cientos de miles son miembros de asociaciones de ayuda mutua. Estas cifras están creciendo incluso en el seno de una sociedad secularizada, utilitaria e individualista.

Volvamos ahora a los partidos políticos y a su papel multifacético en la sociedad italiana, desde la producción de ideología hasta la representación del interés colectivo, desde su movilización de masas hasta la selección del personal político, desde la ocupación de las instituciones del Estado hasta la asistencia social de reparto de influencias. Nuestro énfasis en los partidos políticos puede dar la impresión de una interpretación excesivamente politizada del cambio social italiano, pero no es así. Los partidos políticos han sido la institución esencial de la sociedad italiana de posguerra y los partidos más fuertes de las democracias occidentales. Es precisamente debido a su desproporcionada importancia que la actual crisis política, enraizada en la corrupción, se ha convertido en una crisis más general de gobernabilidad política y regulación social.

Como he sostenido antes, los partidos políticos fueron el principio organizador fundamental de la sociedad italiana en el período de la reconstrucción económica y de la democratización política («el tiempo de la sociedad política», como Farneti lo denominó en 1973). Contribuyeron a integrar una sociedad profundamente dividida y a institucionalizar los valores democráticos y los patrones de com-

portamiento, pero también fueron actores principales en el proceso de modernización. Construyeron un sistema de poder político y económico y de influencia cultural que duró tres décadas y, aunque drásticamente reducido, aún está presente hoy en día. El sistema de partidos italiano ha sido definido como «pluralismo polarizado» (Sartori) y como «un sistema bipartidista imperfecto» (Galli), puesto que ha estado dominado por la Democracia Cristiana (DC), como el principal partido de gobierno, y los comunistas (PCI), como el principal partido de la oposición. El tercer partido más grande, el Partido Socialista (PSI), y los partidos centristas más pequeños (PRI, PSDI, PLI) eran aliados de las dos formaciones principales, mientras que la minoría de extrema derecha de los monárquicos (PNM) y los neofascistas (MSI) permanecían en la oposición.

Los dos principales partidos, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, estaban polarizados ideológicamente. La ideología de la DC era una mezcla especial de catolicismo y economía de mercado, de tradicionalismo y reformismo, de continuidad con el pasado autoritario y una sincera participación en el proceso democrático. Estos componentes diferentes a menudo entraban en conflicto entre sí y dieron lugar a un cierto grado de ambigüedad, pero el clima de la Guerra Fría y el imperativo de conservar el poder eran más fuertes que las potenciales divisiones entre las diferentes «almas» del partido.

El éxito político de la DC se vio favorecido por dos poderosos aliados. Por un lado, la Iglesia Católica, con su poderosa estructura de parroquias diseminadas por todo el territorio y asociaciones tales como la Acción Católica (con más de 2,5 millones de miembros y 4.000 salas de cine a mediados de los cincuenta), cooperativas católicas (casi dos millones de miembros en los cincuenta), comités electorales (tales como los *Comitati Civici*) activados ante elecciones nacionales y locales, etc. El otro aliado fueron los Estados Unidos, con su poder político y económico y el atractivo popular del «modo de vida americano» difundido por las películas de Hollywood y las revistas de circulación masiva.

Los demócratacristianos también pudieron, como he indicado, basarse en la familia, como la institución fundamental de la estabilidad social y el consenso político para construir un partido moderado. Además, a partir de mediados de los cincuenta la DC desarrolló una enorme estructura de partido que comprendía una federación compleja de facciones partidistas (*correnti*), encabezada por líderes nacionales con plazas fuertes en diferentes zonas del país y una sólida red de organizaciones «colaterales» de apoyo, las más importantes de las cuales era la asociación de agricultores creada por Bonomi (*Coltivatori Diretti*), que contaba con 1,6 millones de familias afiliadas de pequeños agricultores a mediados de los cincuen-

ta; la asociación de trabajadores cristianos (ACLI) y el sindicato católico (CISL), que fue formado cuando los trabajadores católicos abandonaron la unificada organización del trabajo, controlada por los comunistas.

La DC también pudo apoyarse en una subcultura católica enérgica y ubicua que era, sin embargo, mucho más fuerte en las regiones norteañas de Lombardía y Venecia que en las regiones comunistas de Emilia-Romana y Toscana, o en el Sur —otro ejemplo de las profundas divisiones de la sociedad italiana—. Las bases del consenso de los demócratacristianos fueron consecuentemente un tanto diferentes en las regiones —sobre todo en el Norte—, donde la ideología y las asociaciones católicas eran fuertes, y en las regiones —sobre todo en el Sur—, donde los recursos públicos eran utilizados para construir las relaciones de reparto de influencias y crear lazos materiales con los votantes, a falta de lazos ideológicos fuertes (las políticas del gobierno tales como la reforma agraria y las agencias estatales de nueva creación como la *Cassa del Mezzogiorno*, Caja del Sur, tenían este objetivo).

El Partido Comunista también desarrolló una fuerte subcultura ideológica y una poderosa red de organizaciones de apoyo y tuvo el respaldo de la otra gran potencia, la Unión Soviética. Sin embargo, este último factor resultó ser más una desventaja que una ventaja. A pesar del prestigio internacional de la URSS por su decisivo papel en la derrota del nazismo, era ampliamente considerada un enemigo de la democracia y supuso la embarazosa subordinación del PCI a su política exterior. La ideología del Partido Comunista italiano era una coherente interpretación del marxismo leninismo, algunas veces dogmática y a veces original, elaborada principalmente por Gramsci y Togliatti. Las contradicciones de la estrategia e ideología del PCI eran mucho mayores que las de los demócratacristianos. Como Partido Comunista, estaba ideológicamente subordinado a la URSS, mas tenía que vivir y adaptarse a las formas y reglas de la democracia parlamentaria. Tenía que tener en cuenta la división del mundo en dos campos antagónicos sin perder de vista la revolución. Tenía que mantener el consenso de su base social esencial, los obreros, a la vez que trataba de formar coaliciones sociales más amplias. De ahí su dilema: atenuar el contenido socialista de su programa a fin de alcanzar la aceptación de las clases medias, o enfatizarlo para atender las aspiraciones de los trabajadores, corriendo el riesgo de quedarse aislados y convertirse exclusivamente en un partido de trabajadores. En Emilia-Romana, la estrategia de alianzas funcionó bien; a escala nacional, fracasó.

Además, aunque el PCI contaba con poderosas organizaciones colaterales (sindicatos, cooperativas, la Unión de mujeres Italianas, la Federación de la Juven-

tud, etc.) y una extensa red de «casas del pueblo», que eran activos centros de vida comunitaria y adoctrinamiento político, estaba en clara desventaja frente a los demócratacristianos, en el sentido de que desde su salida del gobierno en 1947, tenía mucha menos capacidad que la DC para usar los recursos públicos, para organizar un consenso masivo. Finalmente, la derrota del movimiento campesino, que se había agitado en demanda de una reforma agraria en el Sur, y el debilitamiento de los sindicatos, debido a la acción combinada de los gobiernos conservadores y de los empresarios agresivos, fueron unos duros golpes en los años cincuenta.

Pese a estas desventajas, el PCI sacó partido de su posición como el principal partido de la oposición en un país donde mucha gente tenía razones para protestar. Su número de miembros creció gradualmente tras su derrota en las elecciones de 1948, y desempeñó un papel decisivo en la consolidación de los valores y las prácticas democráticas y en la integración de la clase trabajadora en una sociedad industrial madura.

A medida que continuaba la modernización, los dos partidos principales consolidaron su poder y redujeron sus diferencias ideológicas. Por un lado, el partido de la Democracia Cristiana incrementó sistemáticamente su autonomía con respecto a la Iglesia y a los grandes grupos financieros e industriales; «colonizó» el archipiélago de aparatos del gobierno y de agencias del estado, controlando la burocracia tradicional sin reformar el Estado; desarrolló el sistema de empresas propiedad del Estado iniciado por el régimen fascista (IRI, ENI) y creó nuevas agencias públicas tales como la Agencia Especial para el Desarrollo del Sur (*Cassa del Mezzogiorno*). Por otro lado, el Partido Comunista siguió controlando el mayor sindicato —que se hizo particularmente fuerte en las fábricas del noroeste durante el período de intensa y rápida industrialización de los sesenta— y atrayendo y dirigiendo la oposición y los movimientos de protesta. Aun cuando estos movimientos empezaron espontáneamente y eran críticos con su política moderada, como lo fueron en los años setenta, el PCI sacó provecho en las urnas del clima ultraizquierdista generalizado.

No obstante, la distinción de papeles entre un partido de gobierno que controlaba el Estado y un partido de la oposición que dirigía los movimientos sociales no era clara: el partido demócratacristiano pudo dirigir movimientos sociales importantes, como los de los agricultores independientes, artesanos, comerciantes, etc., y el Partido Comunista pudo controlar instituciones del ámbito del gobierno local, principalmente en Emilia-Romana y en Italia central. En general, los actores principales de la sociedad política, organizaciones y movimientos o bien fueron

controlados o insertados en las estrategias del partido de gobierno o del principal partido de oposición.

A medida que proseguía la industrialización y la modernización, los costes de la mediación política aumentaron. Los principales partidos políticos redujeron lenta y constantemente sus diferencias ideológicas durante los setenta y los ochenta y debilitaron su atractivo ideológico hacia el electorado. Además, los partidos del gobierno y la oposición desarrollaron crecientemente unas relaciones *consensuales*. Los gobiernos de coalición de centro izquierda se hicieron más débiles y se dividieron más y desarrollaron un estilo de gobierno de día a día sin una visión estratégica coherente. Trataron de compensar un consenso en declive con un modelo de reparto de las influencias derivadas del estado del bienestar —la distribución de beneficios asistenciales no en respuesta a las necesidades reales, sino con el propósito de obtener apoyo de clientes políticos—, y para conseguir respaldo aumentaron la práctica de discutir las decisiones de política con el principal partido de oposición y de darle una parte considerable de los puestos de gestión en las instituciones públicas (bancos y empresas controladas por el Estado y, más adelante una cadena de televisión). Aunque excluido del gobierno nacional —excepto durante el efímero «gobierno de solidaridad nacional» de finales de los setenta—, el PCI participó en el proceso de legislación en el Parlamento e incrementó su control de los gobiernos locales, fundamentalmente en las ciudades principales.

El Partido Socialista (PSI), que a principios de los sesenta pasó con los comunistas de la oposición a una alianza con los demócratacristianos en el gobierno nacional, mantuvo sus vínculos con el PCI en muchas administraciones locales. La estrategia del PSI oscilaba entre la subordinación al PCI o a la DC e intentos de explotar su poder de coalición como el partido bisagra entre los dos grandes y ganar un status más importante que el que le aseguraban sus resultados electorales. Tras las elecciones de 1983, los socialistas lograron liderar la coalición de gobierno e intentaron implementar una estrategia de modernización que —aunque obtuvo algunos éxitos parciales en políticas económica y laboral y en política exterior— no tuvo éxito global debido a la oposición combinada de los dos grandes partidos y a los propios errores del PSI, por encima de todo su implicación en la corrupción política.

Los partidos políticos han tenido efectos beneficiosos y perjudiciales en la sociedad italiana. Ayudaron a crear las condiciones para el crecimiento económico y la modernización social y cultural, pero no demostraron ser igualmente capaces de manejar las tensiones y contradicciones provenientes de esos procesos, o de

dirigir la profunda transformación del país que tuvo lugar desde finales de los cincuenta en adelante. Además, fueron los responsables, en medidas diferentes y de maneras diferentes, de las serias patologías del sistema político italiano —las más serias de las cuales fueron la corrupción generalizada y un déficit público alarmante—, que han explotado en años recientes.

La corrupción era el resultado de una «democracia bloqueada», con un «metabolismo» insuficiente y unos papeles casi estáticos para los partidos del gobierno y la oposición. Esta situación entraba en conflicto con la velocidad del cambio de la economía y del ámbito cultural. La corrupción era hasta cierto punto un síntoma de esta tensión, una suerte de respuesta perversa de algunos de los actores políticos a las demandas de una sociedad que crecía y cambiaba rápidamente. La enorme deuda pública era el resultado de un «estado del bienestar al estilo italiano» y un mecanismo principal de manejo de la tensión y de formación de consenso. Como he sostenido antes, el reparto de influencias del estado de bienestar era una utilización defensiva y política de la asistencia social por parte de los partidos del gobierno con propósitos de consenso, y distorsionó sistemáticamente el sector público.

Analicemos en mayor detalle el reparto de influencias del estado de bienestar en relación a otro rasgo específico de la sociedad italiana, «la cuestión del Sur». El crecimiento del estado del bienestar y la consiguiente crisis fiscal han sido rasgos comunes de las sociedades occidentales en décadas recientes, como resultado de las presiones sociales desde abajo y como un mecanismo de formación de consenso y manejo de la tensión desde arriba. En Italia, sin embargo, más que en ningún otro sitio, las políticas de bienestar han adoptado la forma de una asistencia social políticamente controlada y se han convertido, en ausencia de reformas básicas, en una forma deliberada de manejar las tensiones y los conflictos sociales para los gobiernos de coalición débiles y para las elites carentes de la capacidad hegemónica para integrar a las masas. Al hacer tal, las políticas de bienestar también contribuyeron a la fragmentación y a la jerarquización de las categorías sociales. La DC, que siempre había extraído apoyo de diferentes clases sociales se convirtió progresivamente en un partido comodín y —especialmente en el Sur— en un partido de influencias, capaz de conseguir el consenso no tanto mediante la implementación de políticas de desarrollo coherentes, sino a través de la distribución de recursos y beneficios particulares a individuos, grupos y comunidades locales. Los otros partidos del gobierno-coalición siguieron el mismo camino en grados diferentes, tanto en lo referente a la política de influencias corporativas como en lo referente a la corrupción.

Esta estrategia de movilización individualista (Graziano y Tarrow, 1979; Pizzorno, 1993) no le costaba mucho al erario público mientras supusiera recursos limitados y estuviese acompañada, en la búsqueda de consensos, por una fuerte movilización ideológica (anticomunismo, religión). Pero cuando la política de influencias corporativas se convirtió en una política de masas, tanto por el manejo de la tensión como por razones electorales, provocó un déficit alarmante y contribuyó decisivamente a la crisis de la DC y de su régimen político. Además, la política de influencias corporativas de carácter masivo iba acompañada por el crecimiento de un aparato burocrático enorme, dirigido por los partidos del gobierno y que servía a una creciente masa heterogénea de clientes. Como estaba fragmentada y era ineficiente, la burocracia del estado contribuyó a la formación de políticas públicas distributivas fragmentadas e incoherentes.

El caso de las regiones del Sur es aleccionador a este respecto. La «cuestión del Sur» ha sido, desde el nacimiento de la nación-estado italiana, un problema dramático marcado por la pobreza generalizada, las emigraciones masivas y el crimen endémico. Ni los gobiernos anteriores a la Primera Guerra Mundial, ni el régimen fascista pudieron o quisieron cambiar la situación y reducir la brecha entre el Mezzogiorno y el resto del país. Los gobiernos democráticos de los últimos cincuenta años lo han hecho mejor: los niveles de renta, condiciones de vida y patrones culturales de los italianos del Sur se han transformado, como los de sus compatriotas. Pero la brecha entre el Norte y el Sur no ha cambiado significativamente en términos relativos, aunque ahora también existe una mayor diferenciación entre las distintas partes del Mezzogiorno.

El gran fracaso del estado democrático italiano es que no se han generado procesos autosostenibles de crecimiento productivo en amplias zonas del Mezzogiorno. Indudablemente ha habido una mejora en los niveles de vida, pero esta ha provenido fundamentalmente de dos fuentes principales, aparte de las remesas de los trabajadores emigrantes. Por un lado, el empleo público y la asistencia pública, que fomentaron las relaciones de reparto de influencias y una actitud de la población que se ha situado como «cliente» en relación a la autoridad pública. La otra fuente de la mejora ha sido la economía ilegal del crimen organizado (la Mafia en Sicilia, la Camorra en Nápoles y la 'Ndrangheta en Calabria).

Hoy en día, después de décadas de una «estabilidad inestable», la política italiana está experimentando cambios profundos. Como consecuencia del desmoronamiento del comunismo y de los acontecimientos internos, se ha acabado el equilibrio político basado en las relaciones conflictivo-complementarias entre los dos partidos principales, uno siempre desempeñando el papel de gobierno y el otro

siempre desempeñando el papel de oposición (junto a un amplio control del gobierno local y la colaboración parlamentaria en la redacción de las leyes).

Tras las elecciones generales de 1994, el antiguo partido de la Democrazia Cristiana perdió casi dos tercios del voto y quedó gravemente escindido en facciones políticas opuestas. El resto de los antiguos partidos de la coalición de gobierno, como el PSI y el PRI, prácticamente han desaparecido. El antiguo Partido Comunista también perdió votos y sufrió la secesión de su ala izquierda cuando ésta cambió de nombre y de estrategia política. El vacío político fue llenado por nuevas formaciones políticas: primero, la Liga Norte, que basa su atractivo en una oposición frontal a la corrupción del viejo régimen político con base en Roma y, después, Forza Italia, el partido liderado por un exitoso empresario de los medios de comunicación, que —junto a los antiguos neofascistas— se apoderó de la mayor parte del voto moderado y conservador.

El sistema político italiano está buscando una nueva configuración, pero la transición es difícil: amplios sectores de las elites políticas y poderosos grupos de interés vinculados a ellas se resisten al cambio de las reglas del juego y del sistema de poder —que les ha proporcionado tantos beneficios—, mientras, a la vez, buscan acuerdos con la «nueva» élite política. De hecho, algunos miembros de la nueva élite no son nuevos en absoluto, sino elementos «reciclados» de la vieja, y muchos de los nuevos actores políticos muestran una marcada tendencia a imitarles, asimilando sus prácticas en el ejercicio del poder y en la obtención del consenso.

Los partidos políticos son más débiles que en el pasado, tienen menos recursos y consiguen peores resultados en las escalas de «prestigio» de las encuestas de opinión. Su continuado papel en una democracia representativa es incuestionable, pero están intentando dolorosamente cambiar sus estrategias y organizaciones a fin de conservar su influencia y contrarrestar el atractivo de la democracia «videocrática» plebiscitaria.

LOS ACTORES DEL CAMBIO SOCIAL

Incluso los partidarios más acérrimos de la tesis de la modernización bloqueada no pueden negar los cambios profundos y amplios que han tenido lugar en la sociedad italiana en décadas recientes. Nuestra tercera cuestión tiene que ver específicamente con los principales actores de este cambio. Dado el hecho de que las instituciones políticas fueron capaces de evitar una crisis sistémica y de mante-

ner el poder, pero no de guiar el proceso de desarrollo (la tesis de la modernización desigual), los principales actores del cambio y de la modernización deberían buscarse más en la sociedad civil que en el Estado, más en el individuo que en los actores colectivos, más en las estrategias de familias y empresas que en las de los partidos políticos y agencias gubernamentales. Esto no pretende negar el impacto de los partidos políticos, movimientos colectivos y agencias estatales en el cambio, sino darles el peso adecuado en comparación con otros actores significativos.

Ya hemos examinado las estrategias de los actores políticos en la sociedad italiana. Los partidos en el poder generalmente dieron una respuesta fragmentada a los problemas que surgían mediante la política de reparto de influencias, el uso político de la asistencia social y la distribución de beneficios a los grupos de interés más agresivos y vociferantes. Los gobiernos de coalición débiles y divididos internamente que formaron llevaron a cabo una gestión de día a día de las cuestiones más urgentes, careciendo de visión estratégica, pero garantizando la supervivencia del régimen político y del bloque social dominante. Esta situación se hizo particularmente evidente a mediados de los setenta, cuando el mayor partido de oposición, el PCI, fue el principal beneficiario electoral de las protestas masivas de años precedentes (alcanzó su máximo de votos absoluto, alrededor del 35 %, en las elecciones locales de 1975 y en las elecciones generales de 1976), pero no consiguió reemplazar a la coalición de gobierno existente con una alternativa. Mientras una «cultura de oposición» prevalecía entre muchos de sus líderes, cuadros y las bases, el PCI participó en el reparto de los puestos de dirección de los bancos y empresas del estado y del canal de televisión nacional (la práctica del *cuoteo*).

El ciclo de la representación política (Pizzorno, 1993) —un modelo complementario al ciclo de crecimiento y modernización— era muy limitado. Según este modelo, nuevas identidades e intereses colectivos surgen periódicamente de las transformaciones sociales. La mayoría de ellos encuentra, en distintos grados, representación política en movimientos colectivos, asociaciones y partidos, en el doble sentido de que se forman nuevos actores políticos y los viejos tratan de incorporar las nuevas demandas. Los «imperativos organizativos» de la acción política —tales como la burocratización de las estructuras representativas, la creciente brecha entre los líderes y las bases, los cambios de estrategia y de táctica y los compromisos que conlleva la participación en procedimientos parlamentarios y políticas de gobierno— progresivamente ponen fin al entusiasmo colectivo y promueven la apatía entre los seguidores militantes y los partidarios en general. Después de un tiempo, se crean las condiciones para una nueva fase del ciclo, con la aparición de nuevas demandas y la formación de nuevas identidades colectivas.

En Italia, durante el período crucial que va desde finales de los sesenta a comienzos de los ochenta, la acción política fue particularmente intensa y turbulenta, pero el ciclo de representación política quedó incompleto. Nuevos movimientos colectivos —de trabajadores, estudiantes, mujeres, ecologistas— dieron voz a las nuevas demandas, y los partidos tradicionales pudieron, hasta cierto punto, incorporar nuevas demandas. Pero tanto el sistema de «democracia bloqueada» —que no permitía un intercambio de papeles entre el gobierno y la oposición— como la eficacia limitada de las políticas públicas alteró la secuencia y propició más violencia y largas protestas, por un lado, y menos cambio estratégico, por el otro. Los nuevos partidos de izquierda eran, de hecho, un fracaso electoral. El Partido Comunista entró en el gobierno a finales de los setenta (pero únicamente a causa de la emergencia nacional que había creado la escalada de terrorismo político), durante un período limitado y con pocas innovaciones en materia de política, principalmente en salud y en las políticas regionales.

El sistema político italiano era, más que nunca, una democracia bloqueada. Continuaba careciendo de algunos rasgos básicos de un sistema de gobierno democrático, tales como la alternancia de los partidos en el gobierno y en la oposición y la distinción clara entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Los resultados fueron una consolidación de las prácticas *consensuales* en el parlamento y en las instituciones controladas por los partidos, tales como bancos y la televisión pública; la distorsión del espacio público mediante la política de reparto de influencias; el *trasformismo* y la corrupción generalizada de las elites políticas, e incluso los oscuros intentos de derrocar las instituciones democráticas por parte de grupos extremistas y de servicios secretos corruptos.

Esto no quiere decir que los protagonistas de este período de intensa acción colectiva, los movimientos sociales, no tuvieran un impacto. Contribuyeron a cambios importantes en los valores, actitudes y el tipo de vida, pero no fueron capaces de producir cambios duraderos en el sistema político y en las políticas del gobierno. Los movimientos de trabajadores del «otoño caliente» de 1969, los movimientos estudiantiles de 1968 y los movimientos de liberación de la mujer y ecológicos contribuyeron de manera significativa a cambios culturales de gran alcance en la sociedad italiana en lo referente a las relaciones laborales, las relaciones entre padres e hijos, los derechos de la mujer, la moral sexual y la protección medioambiental. El antiautoritarismo de los movimientos de trabajadores y estudiantes introdujo cambios en el lugar de trabajo y en las escuelas, mientras que el antisexismo del movimiento feminista y la nueva sensibilidad medioambiental, promovida por el movimiento ecológico, se convirtieron en cambios duraderos en la cultura italiana. Además, estos movimientos influyeron en la aprobación de reformas moderni-

zadoras, tales como el divorcio, el aborto y las leyes de familia. Pero, en general, su impacto político fue menos significativo que su impacto cultural, y menor de lo que podría haberse esperado por el alcance y escala de su movilización masiva.

Analicemos con mayor detalle el caso del movimiento obrero. Después del «otoño caliente de 1969», los sindicatos fueron atacados por los trabajadores militantes más radicales, pero pronto pudieron hacerse con el liderazgo del movimiento de protesta, haciendo demandas más radicales y adoptando tácticas más militantes, pudieron, así, aprovechar y canalizar la protesta de los trabajadores. Los sindicatos gozaron de un rápido y extraordinario aumento de poder e influencia a comienzos de los setenta, desempeñando un papel que usualmente jugaban los partidos políticos. Pero su estrategia alcanzó un límite cuando amenazó las inversiones de las empresas y desafió el monopolio de los partidos en la representación política. De hecho, en una economía capitalista que está profundamente integrada en el mercado mundial, el poder sindical no puede pasar de un nivel crítico, por encima del cual bloquea las inversiones, que son la premisa básica de sus demandas de incremento salarial. Cuando se llega a este nivel, a menos que los sindicatos pasen a formar parte de una coalición política que cambie el régimen político, tienen que limitar su poder de veto y transformarlo en una política de *co-decisión* en el plano de la empresa y en una mayor influencia en la formulación de la política gubernamental. En Italia, pese a la retórica revolucionaria de los pequeños grupos políticos, no había en absoluto las condiciones para un cambio revolucionario, y los sindicatos eran de orientación reformista. No estaban dispuestos a desempeñar un papel similar al de los sindicatos alemanes en el proceso de toma de decisiones en el plano de la empresa (*Mitbestimmung*, co-decisión). Lo que trataban de hacer era influir en las políticas gubernamentales en áreas tales como el empleo, la asistencia social, la política industrial y demás. Esta estrategia trajo consigo ganancias considerables para el ámbito del trabajo en los años setenta. Mientras tanto, la creciente internacionalización y globalización generalizaron las reglas del juego competitivo a escala mundial, fijando limitaciones a las estrategias sindicales, y fortalecieron a la empresa italiana a través de las conexiones con empresas extranjeras. La innovación tecnológica y organizativa y la racionalización debilitaron la base sindical en las grandes empresas mediante las inversiones que reducían puestos de trabajo, la descentralización productiva, el incremento de la flexibilidad y cierta desregulación del mercado de trabajo. Los márgenes de beneficios se incrementaron y la influencia de los valores empresariales y de los criterios de gestión se expandieron crecientemente en la sociedad italiana.

En esta coyuntura, el otro actor principal en las relaciones industriales, las asociaciones empresariales, lentamente recuperaron la influencia y el control. Más

preocupadas por los intereses de las grandes empresas —donde los sindicatos eran fuertes— que por los de la mayoría de pequeñas empresas, que pedían «más mercado» y menos estado, siguieron una estrategia defensiva durante los años setenta, dejando que la relación de fuerzas entre patronos y trabajadores cambiase lentamente en la empresa y hasta en cada planta de la misma, mediante decisiones de inversión y estrategias de gestión. En los años ochenta, desempeñaron un papel cada vez más agresivo, pidiendo más flexibilidad en las relaciones laborales y una mayor moderación en las demandas sindicales de incremento salarial (Martinelli, 1994).

En general, parece claro que los principales cambios sociales se produjeron lejos del centro del escenario político, en parte como una respuesta a los movimientos colectivos, en parte siguiendo la dinámica inherente al crecimiento económico y la modernización social. Si confinamos nuestro análisis al papel desempeñado por el gobierno y la oposición, sindicatos y asociaciones empresariales, elites dominantes y movimientos de protesta colectiva, corremos el riesgo de pasar por alto procesos de cambio esenciales. Entonces, tenemos que prestar atención a las estrategias de los actores no políticos, tanto colectivos como individuales —como las familias, las empresas, las asociaciones de voluntarios, los consumidores, los beneficiarios de la asistencia social y las mujeres jóvenes—, al papel del mercado, a la innovación empresarial y al consumo masivo —relacionado con la cultura del individualismo—, a la permanente, aunque cambiante, importancia de la familia —con sus estrategias de ingresos provenientes de fuentes múltiples y apoyo mutuo— y al papel diferente de las mujeres.

EL MERCADO

El mercado es un mecanismo poco exigente culturalmente, en el sentido de que no requiere grandes cambios en la identidad propia, sino únicamente que uno juegue de acuerdo a las reglas de su juego. Propicia grandes transformaciones en las relaciones sociales (geográficas, ocupacionales y movilidad social) y fomenta el conflicto social, pero también ayuda a integrar y transformar la sociedad y la cultura, generando expectativas de continuo ascenso social, y desarrollando estilos de vida comunes y actitudes de consumo. Una movilización individualista continua a través del consumo masivo puede traer cambios más persistentes que las oleadas temporales de movilización colectiva.

En la Italia de posguerra, el crecimiento del mercado fue una consecuencia «espontánea» más que el resultado de políticas económicas deliberadas. Los

grandes partidos políticos, con argumentos diferentes, desconfiaban ideológicamente tanto del libre mercado como del consumo masivo y de los cambios culturales que estos implicaban. Famosos programas para la recuperación y el desarrollo fueron propuestos por la patronal más importante (Confindustria), por el mayor sindicato (CGIL) —que era de orientación marxista— y por los partidos de centro izquierda y el ala reformista del partido de la Democracia Cristiana.

El modelo propugnado por el presidente de Confindustria, Angelo Costa —un miembro prominente de una estricta familia católica de navieros de Génova—, era una mezcla de confianza en el libre mercado y fe en los valores tradicionales y las relaciones sociales. Costa enfatizaba los ahorros y la inversión frente al consumo, la palabra ética frente al ocio, la complementariedad en lugar de la oposición entre cultura campesina y cultura industrial y la necesidad de garantizar la continuidad de lo que Schumpeter definió como los «estratos protectores del capitalismo», tales como artesanos, pequeños comerciantes y campesinos independientes. En sus hechos y escritos, Costa mantenía que era necesario una transición suave a la sociedad industrial, con un intento de preservar los valores y actitudes esenciales de una sociedad preindustrial de acuerdo a la ideología del «paternalismo ilustrado».

El *Piano del Lavoro* (Plan del Trabajo) de la CGIL, presentado en 1949, era un ambicioso plan de gasto público que se financiaría mediante impuestos fuertemente progresivos y que tenía como objetivo la construcción de nuevas viviendas, escuelas y hospitales, recuperar la tierra e implementar una reforma agraria y nacionalizar las empresas de energía eléctrica para desarrollar energía hidroeléctrica. El efecto positivo de estas medidas en pro del empleo se estimó en 700.000 nuevos puestos de trabajo. Para alcanzar estos objetivos, los sindicatos ofrecían «hacer sacrificios», esto es, moderar sus demandas salariales.

Los programas de desarrollo de los sindicatos y las patronales se oponían en sus actitudes hacia los papeles respectivos del libre mercado y del Estado en la promoción del crecimiento y del empleo, y en su definición del alcance y de las características de las relaciones industriales, pero compartían la preocupación por los requisitos de una intensa acumulación y una marcada preferencia por los valores sociales tradicionales en las relaciones familiares y en el comportamiento del consumidor. Es esclarecedora a este respecto la lista de artículos de consumo que acordaron los sindicatos y las asociaciones empresariales para protegerse de la inflación: la lista transmite la imagen de una población trabajadora austera y tradicional, sin lugar para coches, refrigeradores o artículos de ocio de ningún tipo. Esta imagen del estilo de vida de los trabajadores cambió radicalmente pocos años más

tarde. Lo que se había considerado consumo superfluo pronto se convirtió en algo indispensable para el trabajador medio.

Dada esta «convergencia objetiva de valor», a pesar del antagonismo de clases, no es de extrañar que hubiese poco espacio para las políticas reformistas, como las sugeridas en 1954 por el ministro demócratacristiano de Finanzas y por los líderes de los pequeños partidos de centro-izquierda, tales como La Malfa, que estaban inspirados en el *New Deal* norteamericano y en las experiencias socialdemócratas de los países del Norte de Europa. Estos reformistas propugnaban políticas de intervención estatal de tipo keynesiano para corregir los desequilibrios del mercado, alcanzar el pleno empleo, eliminar el déficit comercial y superar el subdesarrollo, sobre todo en el Mezzogiorno.

Ninguno de estos programas de desarrollo fue adoptado, pero una mezcla peculiar de todos ellos acompañó al crecimiento imparable del mercado y del consumo masivo. Por un lado, el modelo de libre mercado defendido por Confindustria ciertamente ganó, pero borró del mapa las virtudes tradicionales y las relaciones sociales que Costa apreciaba. Por el otro, la intervención del Estado, solicitada tanto por el CGIL como por los componentes de orientación reformista de la coalición de gobierno centrista, también tuvo lugar, pero más que lograr las metas generales proclamadas (reducir la división entre el Norte y el Sur y desarrollar servicios sociales), tuvo un papel decisivo en la formación de consenso para los partidos del gobierno mediante la política de reparto de influencias y la distribución de beneficios a grupos sociales concretos (a menudo de acuerdo con las demandas sindicales para categorías particulares). Cualesquiera que fuesen las estrategias intencionadas que siguieron los diferentes actores económicos y políticos, los hechos relevantes fueron un comportamiento económico extraordinario y el crecimiento imparable del consumo masivo.

En los «años del *boom*» a comienzos de los sesenta —al principio del período que cubre nuestro estudio—, el mercado desempeñaba crecientemente un complejo papel no económico, junto a su función económica de fomentar la productividad y la competitividad: la socialización de la mayoría de los italianos en los hábitos y estilos de vida del capitalismo de masas; la promoción social de grupos sociales desfavorecidos, principalmente trabajadores industriales, artesanos y comerciantes, y una consolidación creciente del poder y la influencia de las elites empresariales y los partidos políticos.

La discontinuidad más importante de la sociedad italiana en el período de posguerra —junto a la instauración de un sistema político democrático— fue el

«círculo virtuoso» entre acumulación, consumo masivo y consenso político que, por primera vez en la historia italiana, rompió, aunque no del todo, con el viejo equilibrio entre sueldos bajos y consumo bajo, en el que se habían basado las relaciones entre las clases sociales.

La experiencia generalizada de niveles de renta en aumento y estilos de vida más cómodos, la oportunidad concreta de obtener los símbolos de la «sociedad de la abundancia» (coches, televisores, electrodomésticos, ropa fabricada en serie, etc.) promovieron el consenso colectivo para el mecanismo productivo de la economía de mercado y ayudaron a legitimar los valores e instituciones de la democracia occidental y a las elites gobernantes que las defendían. Como escribe Romeo (1990: 254), en los años del «milagro económico» el pueblo italiano abandonó el sueño de una «grandeza» política inalcanzable y descubrió oportunidades inimaginables de desarrollo y éxito en las actividades productivas. Los viejos problemas y los sufrimientos de todo un siglo podían ser percibidos y encarados en sus dimensiones reales. Por vez primera, los ideales de la democracia occidental moderna lograron un consenso y una legitimación generalizados, no sólo como una creencia de las elites cultivadas, sino también como una conquista y un ideal compartido por las masas. Italia entraba, en efecto, en la comunidad de naciones occidentales.

La participación colectiva en la economía de mercado también aumentó el volumen de las relaciones sociales e intercambios culturales con otros países industriales avanzados, limitando así el impacto del localismo y de los valores y actitudes provincianas. Además, el efecto combinado de democracia política y economía de mercado redujo el impacto de los mecanismos jerárquicos de control social (enseñanzas religiosas dogmáticas, gestión paternalista en las empresas, estructuras de partidos centralizadas, instituciones estatales autoritarias) y, por el contrario, incrementó el papel de la integración social a través de la negociación colectiva (principalmente, pero no exclusivamente, en las relaciones laborales) y del acuerdo entre múltiples opciones libres.

El crecimiento imparable del consumo masivo está ilustrado por los datos referentes a la posesión familiar de bienes de consumo duraderos. En los cinco años del *boom* económico, al comienzo del período analizado en nuestro estudio, los ingresos gastados por los italianos en la compra de automóviles aumentaron casi un 50%. En la cumbre del *boom* económico (1963), el consumo privado creció un 8,5%, estimulado por los incrementos salariales del 14,5%. Por primera vez, la mayor parte de las familias italianas poseían bienes tales como televisores y refrigeradores. A partir de entonces, el consumo creció constantemente, a velocidades

variables en las diversas fases del ciclo económico, manteniéndose constante tras el *boom* económico de principios de los sesenta y la corta recesión económica que siguió en 1964-1966. En 1966, solamente un 31,3% de las familias italianas poseía un automóvil privado, un 59,5% un televisor, un 60% un refrigerador y un 32,2% una lavadora. En 1990, el 76,5% tenía un automóvil, el 95,7% un televisor, el 96,3% un refrigerador, el 92,5% una lavadora y el 88,4% teléfono. Los hábitos alimenticios, especialmente el consumo de carne, también cambiaron significativamente. Hoy en día, nuevos productos han alcanzado proporciones significativas de consumidores (en 1992, el 39,5% de las familias tenía vídeo, el 22,2% un lavavajillas, el 11,6% un ordenador personal). Particularmente significativo en términos comparativos es el hecho de que alrededor de dos tercios de las familias son propietarios de sus casas, un indicador claro de la importancia cultural del hogar en la sociedad italiana contemporánea y de las profundas raíces territoriales de muchos italianos.

La expansión de la televisión ha sido impresionante: ahora retransmite las 24 horas del día. Los italianos pasan un promedio de cuatro horas al día viendo la televisión; el mercado de la televisión está controlado por un *duopolio* formado por la RAI (la cadena pública) y Fininvest (la cadena privada), más una multitud de pequeñas cadenas, principalmente locales. La expansión de la televisión ha contribuido a promover un mercado unificado —basado en creencias ampliamente compartidas sobre la mejora de la calidad de vida mediante la posesión y el uso de una creciente cantidad de bienes y servicios—, así como también a estimular el crecimiento de los mercados específicos, apelando a segmentos concretos de la población. Los medios de comunicación masivos ayudaron a homogeneizar y a diversificar el consumo promocionando diferentes tipos de «bienes generales de consumo de la ciudadanía». La televisión también se convirtió en una herramienta poderosa de formación de consenso y de adoctrinamiento cultural.

Esta revolución en el consumo ha tenido dos consecuencias principales. Primero, ha reducido las diferencias básicas en el estilo de vida de las diferentes clases. El estilo de vida y patrones de consumo de un hogar de la clase trabajadora aún diferían de los del hogar de un militar o de los de la familia de un empleado con el mismo nivel de ingresos (el último gastando relativamente más en productos nuevos, ocio y vacaciones; el primero gastando más en comida). Los cambios importantes han sido que las diferencias en los modelos de consumo sustituyeron a las diferencias en las cantidades de productos y que la carencia relativa reemplazó a la pobreza absoluta.

La segunda consecuencia importante ha sido que la mayor prosperidad material y el acrecentado interés por el consumo fomentaron el individualismo y el

familismo. El papel de la familia como la unidad de consumo básica aumentó. Los bienes duraderos tales como automóviles y televisores contribuyeron a formas de ocio centradas en la familia nuclear. Las mujeres se convirtieron en el blanco principal de la publicidad de los nuevos bienes de consumo; aquellas que no trabajaban fueron crecientemente aisladas dentro del hogar.

Junto a la expansión del consumo masivo, la urbanización también fomentó formas de sociabilidad más centradas en la familia nuclear. La organización urbana tendía a aislar a las familias en pequeños y cómodos apartamentos, con menos oportunidades para las relaciones comunitarias. Aunque no deterioraron los vínculos familiares de la familia extensa hasta el punto de cómo lo hicieron en otros países desarrollados, las emigraciones cambiaron las formas de sociabilidad. A este respecto, el modelo burgués tradicional de la esposa que no trabajaba, preocupada de criar a los hijos y de encargarse del hogar, se extendió, con diferencias culturales significativas, a las familias campesinas y obreras, mientras que la curva del empleo femenino fuera de la agricultura subió.

La innovación empresarial está relacionada con el papel del mercado. Este ha sido un rasgo constante del desarrollo italiano y supuso oleadas subsiguientes de industrialización, que se extendieron de Oeste a Este y de Norte a Sur. Después de la fase de acción colectiva de finales de los sesenta y principios de los setenta, a finales de los setenta y en los ochenta la innovación empresarial fue también una estrategia de la empresa en reacción al poder de los sindicatos. Muchas empresas, grandes y pequeñas, recuperaron la autonomía en la toma de decisiones y consiguieron flexibilizar la producción mediante la descentralización de la producción, las inversiones en tecnologías que ahorran mano de obra (automatización) e innovaciones en los productos. De nuevo es importante recalcar que los cambios fueron introducidos por empresas individuales más que por las asociaciones empresariales. En otras palabras, hubo una respuesta individual más que colectiva a las limitaciones fijadas por los sindicatos y las leyes laborales.

LA FAMILIA

El otro agente principal de cambio social e integración ha sido la familia. Aunque perdió parte de su papel socializador en favor del sistema escolar y de los medios de comunicación, y parte de su papel de ayuda mutua en favor del sistema asistencial, la familia sigue siendo una suerte de núcleo de las relaciones sociales. Es una estructura de solidaridad mayor, una fuente fundamental de identidad social, una mezcla de agencia de bienestar social, agencia de colocación, unidad de

consumo y, al menos en ciertas regiones y para ciertos grupos sociales, una unidad productiva.

A pesar de la función nuclear continuada de la familia en la sociedad italiana, no deberíamos pasar por alto los cambios fundamentales que experimentó a partir de finales de los sesenta y el importante papel que desempeñó en el cambio social. El declive de la fertilidad, el debilitamiento de los patrones de autoridad en las relaciones entre padres e hijos, el papel crecientemente independiente de la mujer, los cambios en las relaciones sexuales y la creciente marginalización de muchas personas mayores fueron todos ellos cambios fundamentales y, hasta cierto punto, traumáticos. No se limitaban en absoluto a la sociedad italiana. Como se afirma en la introducción a *Convergence or Divergence?* (Langlois, 1994: 13): «La transformación de la estructura de la familia que ha tenido lugar en el transcurso de los últimos treinta años es, sin duda, el cambio más importante y trascendental de la civilización occidental durante este período». Pero la situación italiana muestra rasgos específicos.

En primer lugar, el descenso de la tasa de fertilidad —y la consiguiente reducción del tamaño de las familias— fue mayor y más rápida en Italia. En los años sesenta el índice promedio de crecimiento de la población era del 6,7 por mil; en los años setenta, cayó a un 4,4 por mil; en los ochenta, descendió hasta solamente un 2,5 por mil, y a comienzos de los noventa alcanzó un valor negativo. Los grandes hogares tradicionales con parientes pasaron del 22,4% del total de hogares en 1951 al 13% en 1991 mientras que la proporción de hogares de una única persona pasó del 10,6% a casi un 20% (véase capítulo 0).

El declive de la fertilidad y la reducción del tamaño de la familia están correlacionados con el mismo conjunto de procesos que en otros países occidentales: la entrada masiva de la mujer en el mundo laboral con contratos a tiempo completo, la prolongación de la formación educativa de las mujeres y la postergación del matrimonio, la caída de los índices de nupcialidad y la mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos e índices más altos de abortos. Algunas de estas tendencias —tales como el aumento de los índices de empleo femenino y la postergación del matrimonio— eran más pronunciados en Italia que en otros países desarrollados, mientras que otras —como el índice de abortos— eran menos pronunciadas. Pero el efecto global ha sido un impacto más profundo en el alcance y la velocidad del cambio demográfico.

Los tres factores interrelacionados más importantes que explican la menor fertilidad de las mujeres italianas son la creciente participación de las mujeres en la

fuerza laboral en los sectores industrial y servicios, las modificaciones extraordinariamente rápidas y profundas de las actitudes culturales hacia el papel adecuado de las mujeres casadas y la falta de políticas públicas eficaces para las familias, especialmente en lo que concierne al suministro de servicios sociales para las madres trabajadoras.

El empleo femenino está aumentando a un ritmo constante. Las mujeres están accediendo cada vez más a profesiones consideradas tradicionalmente un coto exclusivo de los hombres, y la brecha entre los promedios salariales de hombres y mujeres ha disminuido. Pero la condición de la mujer —incluyendo a las mujeres trabajadoras— dentro de la familia no ha cambiado significativamente: las tareas de la familia y de la casa (cuidar a los niños, proporcionar atenciones, labores domésticas) continúan siendo una carga considerable para la mujer (véase capítulo 3). Los hombres casados pasan más tiempo en el trabajo, pero también disfrutan de más tiempo libre que las mujeres con niños. Las actitudes culturales de las generaciones más jóvenes con respecto al papel ocupacional de las mujeres ha cambiado significativamente: el ideal «burgués» tradicional —que se extendió a otras clases sociales— de la esposa no trabajadora que se hacía cargo de la casa y el marido como sostén de la familia, que mantenía relaciones con el mundo exterior, ha dado paso a una igualdad mucho mayor en las aspiraciones legítimas de éxito profesional, tanto para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, la mayoría de las mujeres tienen que soportar la carga de expectativas múltiples y en conflicto.

También se encuentran diferencias significativas entre las familias italianas y las familias de otros países occidentales en tendencias tales como el aumento del divorcio, parejas de hecho y nacimientos fuera del matrimonio, así como en el aumento de los hogares de una sola persona y las familias con un único progenitor, que han sido menos pronunciadas en Italia que en la mayoría de los otros países occidentales.

También la condición de la gente joven (como se muestra en el capítulo 1) presenta varias características en común con otras sociedades occidentales, entre las que las más relevantes son: una escolarización más larga, una postergación de la entrada en el mercado laboral, un desempleo más alto y unas relaciones con los padres menos autoritarias. Pero también hay unas cuantas peculiaridades destacables, principalmente en las relaciones con los padres y en las actitudes hacia el matrimonio y los hijos. Según el Estudio Nacional sobre las Condiciones de la Juventud del IARD de 1993 (Cavalli y De Lillo, 1994), la mitad de los hombres de veintinueve años y una cuarta parte de las mujeres de veintinueve años todavía vive en casa de sus padres.

Aunque son evidentes varios síntomas de tensiones crecientes en las relaciones de pareja y en las relaciones intergeneracionales, la familia parece más sólida y estable y más capaz de realizar una gama más amplia de funciones en Italia que en otros países desarrollados, como lo ilustran indicadores tan diversos como menores índices de divorcio, un mayor apoyo financiero y emocional a los hijos adultos por parte de los padres, una probabilidad más alta de «heredar» el trabajo de un progenitor y una mayor importancia de los negocios familiares en la economía.

En general, la familia italiana ha mostrado una capacidad notable para adaptarse en medio de los profundos cambios y contradicciones resultantes de una economía en rápido crecimiento y una sociedad que se moderniza de manera desigual. Por estas razones, tendemos a considerarla en nuestro análisis más como un factor de cambio que de conservación.

Finalmente, uno puede advertir que el papel «positivo» de la familia a la hora de superar las penalidades y las tensiones estaba equilibrado por dos implicaciones «negativas» para una sociedad democrática abierta: la tendencia a «heredar» el trabajo del progenitor limita la movilidad social, y el *«familismo amorale»* pone obstáculos, especialmente en algunas regiones, en el camino conducente a formar una cultura cívica nacional. Este concepto fue introducido por Banfield en su famoso estudio de 1958 de una aldea del Sur de Italia, que recoge una situación en la que los intereses y valores de la familia no solamente se consideran una prioridad más alta, sino que, además, se contraponen a los del resto de la sociedad. En tal situación, las obligaciones para con la familia de uno (como en la expresión italiana *tengo famiglia*: tengo una familia de la que cuidar) se pueden convertir en una justificación para cualquier tipo de comportamiento —incluso ilegal—, para despreocuparse de las responsabilidades propias del conjunto de la comunidad y para ser desleal con el estado. Como escribió Bobbio (1986) más recientemente, los italianos gastan mucha energía y valentía en la familia, de manera que queda poco para la sociedad y el Estado. No debería hacerse excesivo énfasis en el *familismo amorale*, pero es verdad que se ha difundido en Italia una ética centrada en la familia con consecuencias negativas para la integración social y la responsabilidad pública.

CONCLUSIÓN

Si observamos la modernización italiana desde una perspectiva comparativa, nos encontramos ante una aparente paradoja: por un lado, la sociedad italia-

na parece estar más politizada que la de la mayoría de los demás países desarrollados, de acuerdo a indicadores tales como la cantidad de atención prestada por los medios de comunicación a los asuntos y líderes políticos, los porcentajes de votantes en elecciones generales y locales, los índices de pertenencia a partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de intereses, etc. Pero, por otro lado, el cambio se puede explicar mejor en términos de las estrategias de los actores individuales e instituciones privadas —principalmente empresas y familias— que en términos de las estrategias de los actores políticos y de las políticas públicas. Los partidos políticos han sido más fuertes y más influyentes que en otras democracias occidentales. Grandes movimientos colectivos y militantes han movilizado a millones de personas, pero su impacto sobre el cambio fue menor de lo que podría haberse esperado porque el impresionante y rápido desarrollo de la economía y de la sociedad civil no estuvo acompañado por una modernización adecuada de la educación, la cultura, la legislación y la administración pública. La acción colectiva tuvo un impacto sobre el cambio, pero la falta de respuestas institucionales —debido a gobiernos de coalición divididos, elites débiles y una burocracia ineficaz— hizo que su papel fuera menos importante para las reformas. Las estrategias individuales y los actores ajenos a la política tuvieron una influencia más significativa. Las relaciones microsociales y las conductas individuales demostraron adaptarse mejor al cambio que las estructuras macroestatales y la acción colectiva.

En décadas recientes la sociedad italiana puede ser caracterizada como el resultado de la interdependencia de unos cuantos elementos principales: una sociedad civil heterogénea, fragmentada, flexible y resistente centrada en la familia; una economía de mercado vital y competitiva, desigualmente distribuida por todo el país y sometida al desempleo juvenil permanente y a presiones inflacionarias periódicas; un sistema de partidos fuerte y ubicuo, que tiende a envolver a la sociedad y a ocupar las instituciones del Estado, y que hoy en día está en crisis; un Estado grande y centralizado, pero también débil e ineficiente; una cultura de masas fuertemente influenciada por el consumo masivo y los medios de comunicación. Estos elementos están entrelazados, en el sentido de que la falta de gobierno es tanto una causa como un efecto de una sociedad resistente y de una cultura *familista* e individualista.

Si comparamos la situación presente con los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la unidad nacional estaba en juego y se estaba gestando una difícil transición a la democracia, y si la comparamos con la de principios de los sesenta, cuando comenzaron el desarrollo y la modernización y el punto de partida para nuestro seguimiento del cambio social, ahora nos encontramos ante una sociedad más integrada culturalmente y menos polarizada. En lugar de marca-

das distinciones de clase entre la burguesía, los trabajadores y los campesinos, encontramos una fluida constelación de grupos sociales crecientemente diferenciados. En lugar de partidos con diferentes prioridades estratégicas y contradictorias alianzas internacionales, encontramos varios actores políticos que compiten por el poder y reclaman un consenso sobre la base de soluciones «técnicas» a problemas comúnmente percibidos. En lugar de ideologías unificadoras que defendían diferentes y en gran medida opuestas *Weltanschauungen* (cosmovisiones), encontramos un conjunto esencial de creencias ampliamente compartidas acerca de la democracia, la economía de mercado, la libertad individual y la coexistencia pacífica. En lugar de claras diferencias entre una cultura burguesa y una cultura popular —con estilos de vidas y patrones de consumo diferentes—, encontramos una pluralidad de valores y actitudes que cambian de acuerdo a la moda y a la elección personal.

Sin embargo, los problemas tradicionales aún están aquí, como la «cuestión del Sur», una cultura ciudadana débil, un desempleo juvenil masivo, la ineficiencia burocrática, la corrupción política, el crimen organizado y comportamientos ilegales generalizados. Los problemas han cambiado con el país, pero no han sido resueltos. El potencial de conflictos sigue siendo alto por varias razones. Hay problemas tradicionales no resueltos, hay otros que se han atenuado, como muchos aspectos de la desigualdad social, niveles de vida, patrones de consumo, la propiedad de la vivienda y la obtención de educación, y, por fin, otros, como la distribución de los ingresos y el prestigio ocupacional, han permanecido más o menos constantes. Además se generan constantemente nuevas desigualdades (que crean la famosa sociedad de los dos tercios) y surgen nuevos problemas en una economía desigualmente desarrollada y en una sociedad crecientemente multiétnica (a medida que parecen manifestarse síntomas recientes de conflictos regionales renovados y prejuicios étnicos).

La actual transición política, simbolizada por las elecciones generales de 1994, ha reducido de manera significativa el poder y la influencia de los partidos, pero no ha incrementado la eficiencia del Estado ni la eficacia del gobierno, ni tampoco ha mejorado la calidad y la responsabilidad de las elites. En el momento presente, parece que la sociedad italiana, incluso más que en el pasado, será dinámica, próspera, muy conflictiva y difícil de gobernar.

Traducido del inglés por Luis Antonio Fernández Rossier